

Crisis y escándalos durante los gobiernos de Pedro Castillo y Dina Boluarte (2021-2025) en el Perú

Pablo Ariel Cabas
(Instituto de Ciencias Sociais da Universidade de Lisboa)

Resumen

Los gobiernos de Pedro Castillo (julio 2021–diciembre 2022) y Dina Boluarte (diciembre 2022–octubre 2025) han estado marcados por una intensa sucesión de crisis políticas, en un contexto de alta polarización, conflictividad social y desconfianza hacia las instituciones. La prensa escrita, en particular El Comercio y La República, ha desempeñado un papel central en la construcción pública de estos episodios, no solo al informar, sino también al encuadrar y clasificar los eventos como crisis reputacionales o escándalos políticos.

Este proyecto plantea la pregunta: ¿cómo han sido producidas y encuadradas las crisis políticas de estos dos gobiernos por la prensa escrita peruana, y qué tipologías y encuadres predominan en cada medio? ¿Y cómo los presidentes disputaron esos encuadres por medio de sus estrategias defensivas?

Los objetivos son: (1) identificar y clasificar las crisis políticas de ambos periodos, con especial atención a las crisis reputacionales y escándalos políticos; (2) analizar comparativamente los encuadres y narrativas empleados por El Comercio y La República; (3) proponer una tipología que articule las dimensiones temáticas y discursivas de la cobertura mediática; y (4) analizar las características de las estrategias de defensa de los actores y su relación con los resultados.

Metodológicamente, se empleará un análisis de contenido de carácter mixto, clasificando los tipos de crisis, encuadre y defensas.

Palabras clave: escándalos políticos, crisis, presidentes, Perú

1. Introducción

Entre julio de 2021 y octubre de 2025, el Perú atravesó una secuencia de crisis políticas, escándalos, enfrentamientos institucionales y protestas sociales que afectaron a las presidencias de Pedro Castillo y Dina Boluarte. Ambos gobiernos pertenecen a un mismo ciclo político-electoral, pero presentan características distintas, y hasta opuestas.

Castillo llegó a la presidencia como candidato *outsider*, con una débil base congresal, una oposición que cuestionó desde el inicio la legitimidad de su triunfo y una administración atravesada, desde el inicio, por la crisis de gestión, los constantes recambios ministeriales, denuncias de corrupción y fuerte confrontación con el Congreso. Boluarte, su vicepresidenta, asumió luego de la vacancia de Castillo y gobernó durante un periodo más prolongado. Esto,

pese a enfrentar una crisis de legitimidad de origen, protestas sociales, denuncias por violaciones a los derechos humanos, y escándalos que generaron constantes cuestionamientos públicos y una muy baja aprobación social. La más baja de todos los presidentes latinoamericanos, con solo 2% de imagen positiva.

La comparación entre ambos gobiernos plantea un problema de investigación relevante. Si la caída presidencial dependiera únicamente del volumen de crisis o del daño reputacional acumulado, las trayectorias de Castillo y Boluarte deberían haber sido similares. Sin embargo, la política peruana muestra que las crisis no producen un mismo efecto de manera automática. Una protesta social o un escándalo, puede permanecer como episodios acotados erosionando parcialmente al gobierno, o convertirse en una amenaza directa a su continuidad en el cargo. Por lo tanto, no se trata de cuántas crisis enfrentó cada gobierno, sino de cómo éstas fueron públicamente interpretadas, cómo fueron jerarquizadas en el debate público y, finalmente, cómo fueron atribuidas a la figura presidencial.

Este artículo analiza cómo los diarios *El Comercio* y *La República* encuadraron las crisis, y en especial los escándalos políticos durante ambos gobiernos, qué tipo de imputaciones, amenazas y trayectorias predominaron en cada caso, así como las estrategias de defensa utilizadas. La investigación no busca estudiar todas las noticias negativas sobre ambos gobiernos, sino reconstruir aquellas crisis políticas que involucraron directamente al presidente, a la gestión presidencial o a su entorno más cercano.

No toda crisis del sistema político es una crisis presidencial. Una crisis se vuelve presidencial cuando la imputación de responsabilidad se aproxima al jefe de Estado afectando su autoridad, legitimidad, capacidad de gobierno o continuidad en el cargo.

El punto de partida teórico dialoga con la literatura sobre inestabilidad presidencial en América Latina. Los estudios comparados han mostrado la importancia del escudo legislativo, la relación entre Ejecutivo y Congreso, la protesta social, la aprobación presidencial, y la capacidad de los actores políticos para utilizar mecanismos constitucionales de remoción (Pérez-Liñán, 1990, 2009; Hochstetler, 2006; Hochstetler and Edwards, 2009; Llanos and Marsteintredet, 2010a, 2013, 2021; Hochstetler and Samuels, 2011; Camerlo and Pérez-Liñán, 2015; Carlin, Love and Martínez-Gallardo, 2015; Martínez, 2015, 2021). Esta literatura resulta indispensable para comprender el caso peruano, especialmente desde 2016, cuando la confrontación entre poderes, la debilidad partidaria y la normalización de la vacancia por incapacidad moral permanente alteraron los equilibrios del presidencialismo (Dargent Bocanegra and Rousseau, 2021, 2022; Tanaka, 2024). Sin embargo, esas condiciones institucionales no explican por sí solas cómo los acontecimientos se transforman públicamente en amenazas presidenciales. Para ello es necesario observar las arenas de visibilidad, atribución y encuadre donde se construye el significado político de cada episodio (Entman, 1993).

La prensa gráfica constituye una arena privilegiada para observar esa operación. Las portadas no reflejan mecánicamente la realidad política, pero sí condensan decisiones editoriales sobre relevancia, jerarquía, continuidad narrativa y atribución de responsabilidad. En ellas se selecciona qué hechos merecen ocupar el espacio central, qué actores aparecen como responsables, qué tipo de amenaza se vuelve visible y qué vínculo se establece entre el

episodio y la autoridad presidencial. Desde la teoría del framing, los medios no solo informan sobre acontecimientos, sino que seleccionan aspectos de una realidad percibida y los vuelven más relevantes para definir un problema, atribuir causas, formular evaluaciones morales y sugerir desenlaces posibles (Entman, 1993, 2012). En contextos de crisis, esta operación es más relevante porque los actores compiten por instalar interpretaciones confrontativas sobre la gravedad del problema, sus causas, sus responsables y sus salidas (Boin, Hart and McConnell, 2009).

El artículo propone que las presidencias de Castillo y Boluarte, pese a enfrentar ciclos intensos de crisis y escándalos, configuraron procesos comunicativos diferentes. En el caso de Castillo, la acumulación de crisis se produjo en un contexto de debilidad extrema del escudo legislativo, confrontación permanente con el Congreso, alta rotación ministerial, denuncias de corrupción e incapacidad para estabilizar una estrategia defensiva. En el caso de Boluarte, la presión reputacional y social fue severa, pero la continuidad presidencial se sostuvo por la existencia de una coalición parlamentaria que la protegió y por una transformación del conflicto Ejecutivo-Legislativo en una relación de dependencia y mutua conveniencia. La prensa no causó por sí sola la caída o supervivencia presidencial, pero organizó el modo en que las crisis fueron presentadas como amenazas técnicas, normativas, reputacionales, institucionales o sociales, y contribuyó a hacer visibles los trayectos institucionales de acusación, defensa y sanción.

El trabajo utiliza una base original de 9.033 noticias publicadas en las portadas de *El Comercio* y *La República* entre el 28 de julio de 2021 (fecha en la que asume Castillo) y el 9 de octubre de 2025 (fecha en la que Boluarte es destituida). La unidad de análisis es la noticia individual de portada, correspondiente a las tres noticias de mayor relevancia de cada edición disponible. Este diseño permite analizar no solo la presencia de crisis y escándalos, sino también su jerarquización editorial. La base distingue la existencia de crisis político-conflictiva, el tipo de crisis, el tipo de amenaza, la afectación presidencial, el tipo de escándalo, los actores involucrados y los episodios noticiosos.

El trabajo realiza tres contribuciones. En primer lugar, propone una lectura de las crisis presidenciales como procesos y no hechos aislados, centrada en la trayectoria de los episodios. En segundo lugar, introduce la noción de presidencialización de la crisis para observar cuándo un conflicto se aproxima a la figura presidencial y adquiere capacidad de erosionar su autoridad. En tercer lugar, compara dos gobiernos consecutivos que enfrentaron repertorios de crisis parcialmente similares, pero con condiciones institucionales, respuestas políticas y trayectorias de supervivencia diferentes. La siguiente sección desarrolla el marco conceptual que permite articular crisis presidencial, escándalo político y atribución de responsabilidad. La tercera sección presenta el diseño metodológico, el corpus, las variables y el procedimiento de validación. Las secciones posteriores analizarán los resultados empíricos y discutirán sus implicancias para el estudio de los escándalos políticos y la inestabilidad presidencial en América Latina.

2. Crisis presidenciales, escándalos y atribución de responsabilidad

2.1. Crisis presidencial e inestabilidad ejecutiva

La literatura sobre crisis del presidencialismo latinoamericano partió, durante décadas, de la tensión clásica formulada por Linz (1990), según la cual los regímenes presidenciales, al combinar legitimidad dual con mandatos fijos, pueden dificultar la resolución de conflictos entre poderes cuando existen gobiernos divididos, que no permiten mecanismos flexibles para la construcción de mayorías legislativas. Sin embargo, la experiencia latinoamericana posterior a las transiciones democráticas mostró un patrón más complejo. Las crisis presidenciales no significaron el regreso a la inestabilidad militar clásica, sino que desarrollaron formas civiles, parlamentarias y constitucionalizadas de interrupción presidencial. Presidentes electos comenzaron a caer sin que necesariamente colapsara el régimen democrático, mediante renuncias forzadas, juicios políticos, declaraciones de incapacidad, vacancias o sucesiones constitucionales (Pérez-Liñán, 1990, 2009; Hochstetler, 2006; Llanos and Marsteintredet, 2010b, 2010a).

En este marco, una crisis presidencial no debe entenderse como cualquier crisis de gestión, ni como cualquier pico de impopularidad. Pérez-Liñán (2009) la define como una situación de conflicto agudo entre poderes en la que el Congreso intenta remover al presidente, el presidente intenta clausurar el Congreso o alguno de los poderes apoya movimientos contra el otro (la muerte cruzada). La crisis presidencial supone, por tanto, una amenaza a la continuidad del jefe de Estado o al andamiaje institucional que sostiene su autoridad. Esta distinción es importante para el caso peruano, donde la crisis presidencial se volvió una forma recurrente de canalizar el conflicto entre el Legislativo y el Ejecutivo. Desde 2016, la vacancia presidencial, la censura ministerial, las cuestiones de confianza, la disolución del Congreso y las denuncias constitucionales dejaron de ser mecanismos excepcionales y pasaron a formar parte del repertorio ordinario de confrontación.

Los estudios sobre caídas presidenciales identifican una serie de factores que los hacen más vulnerables, como carecer de mayoría legislativa, perder el apoyo de sus aliados, enfrentar escándalos, gobernar en contextos económicos adversos o ser desafiados por protestas masivas (Hochstetler, 2006; Pérez-Liñán, 2009). Otro factor importante es el papel de los partidos políticos y de la institucionalización partidaria. Martínez (2021) sostiene que la estabilidad presidencial depende no solo de variables institucionales inmediatas, sino también de la capacidad de los partidos para organizar horizontes temporales, procesar conflictos, disciplinar actores y sostener o retirar apoyo al Ejecutivo. En sistemas de partidos políticos débiles, los compromisos legislativos son más inestables y los incentivos de corto plazo adquieren mayor peso.

El caso peruano confirma la relevancia de estas dimensiones, pero también obliga a observar una mediación adicional: la forma en que los acontecimientos son públicamente transformados en amenazas a la presidencia. La pérdida del escudo legislativo no actúa de manera automática. Para adquirir eficacia política requieren de una narrativa de accountability que les dé legitimidad. Por lo tanto, las crisis deben ser interpretadas, encuadradas y conectadas con la figura presidencial. Por ejemplo, una crisis de gestión, como

un fuerte incremento de los asesinatos, puede leerse como un problema técnico de seguridad ciudadana o como una prueba de incapacidad presidencial para el cargo. De allí la importancia de analizar no solo las condiciones de la crisis, sino también los procesos de atribución de responsabilidad y las estrategias de defensa de esos actores durante dichos procesos comunicacionales.

2.2. De la crisis ordinaria al desbalance institucional

Dargent Bocanegra y Rousseau (2021) sostienen que el Perú post-transición (2000-2016) había sido interpretado durante años como un caso de continuidad con estabilidad macroeconómica, debilidad partidaria y predominio relativo del Ejecutivo sobre el Congreso. Esa continuidad comenzó a quebrarse con el ajustado triunfo de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) sobre Keiko Fujimori en el 2016, elegido con una bancada minoritaria frente a una mayoría parlamentaria fujimorista en la oposición. Desde entonces, el Congreso ganó centralidad política y empezó a utilizar con mayor frecuencia herramientas de control horizontal como la censura ministerial y la vacancia presidencial.

El resultado fue una transformación del funcionamiento presidencial sin un cambio formal equivalente en las reglas constitucionales. Dargent Bocanegra y Rousseau (2022) describen este proceso como un “cambio de sistema sin cambio de reglas”. La presidencia peruana mantuvo sus atribuciones formales, pero su capacidad de conducción política se volvió más precaria. La vacancia por incapacidad moral permanente, en particular, dejó de ser una cláusula excepcional y se convirtió en un instrumento de disputa política. Esta normalización de la amenaza de remoción alteró los cálculos de todos los actores, y la continuidad presidencial se convirtió en negociable.

Pedro Castillo heredó y profundizó esta dinámica. Su gobierno surgió de una elección altamente polarizada, con una oposición que cuestionó la legitimidad del resultado y un partido incapaz de articular un escudo legislativo estable. (Aguirre Cahua y Calcina Romero (2025) destacan el contexto de grave polarización, el elevado número de escándalos, la pérdida de escudo legislativo, la difícil relación con las élites y el fallido autogolpe como condiciones centrales para su destitución. Desde la perspectiva de este artículo, esos factores importan no solo como causas potenciales de caída, sino como elementos que facilitaron la acelerada presidencialización de las múltiples crisis.

Boluarte representa una trayectoria distinta dentro del mismo ciclo. Pizarro (2023) interpreta la vacancia de Castillo y la juramentación de Boluarte como un colapso democrático y una transición autoritaria, en el que la victoria del Legislativo alteró el equilibrio de poderes y generó una reacción social de alta intensidad. Tanaka (2024), por su parte, sostiene que se pasó de la polarización extrema hacia una coalición conservadora y populista el Ejecutivo y el Congreso, acompañada por una relativa desmovilización ciudadana. Esta coalición no resolvió la crisis de legitimidad, pero sí produjo una estabilidad relativa basada en la protección parlamentaria y en el alineamiento entre el Ejecutivo y una mayoría congresal interesada en preservar el *statu quo* pese a la intensidad de la crisis de representación y los escándalos políticos (Cabás y Flores, 2026).

La comparación entre Castillo y Boluarte permite, entonces, observar dos formas de vulnerabilidad presidencial. Castillo enfrentó una vulnerabilidad por exposición: crisis acumuladas, escándalos crecientes, conflictividad con el Congreso y deterioro de la capacidad defensiva del gobierno. Boluarte enfrentó una vulnerabilidad por legitimidad: origen cuestionado, protesta social, denuncias por represión, escándalos del entorno y dependencia de una coalición parlamentaria impopular.

2.3. Escándalo político, visibilidad y daño reputacional

Thompson (2000) define el escándalo político como una transgresión real o atribuida que se vuelve públicamente visible, genera desaprobación y amenaza la reputación de los actores involucrados. Adut (2008) desplaza la atención desde la transgresión oculta hacia su publicidad: un escándalo existe en la medida en que una audiencia relevante observa, juzga y reacciona frente a la transgresión. Esta perspectiva es especialmente útil para estudiar la prensa, porque permite distinguir entre el hecho denunciado, la revelación pública, la reacción política y la serialización del caso.

En el Perú reciente, muchos escándalos adquirieron relevancia por su capacidad para construir narrativas mediáticas sobre la inmoralidad pública. Cuando el escándalo compromete la conducta, el entorno íntimo, las decisiones, o la autoridad moral del presidente, estamos ante escándalos presidenciales en los que opera una atribución pública directa de responsabilidad. Mientras la teoría situacional de la comunicación de crisis sostiene que la amenaza reputacional aumenta con la responsabilidad atribuida, la severidad del daño y la historia previa de crisis (Coombs, 2006, 2007), la política de la culpa permite organizar las estrategias para concentrar, desplazar o evitar esa responsabilidad (Hood, 2011).

Un presidente puede sobrevivir a escándalos graves si conserva la protección legislativa, si logra desplazar la imputación hacia sus subordinados, o si fragmenta la atención pública. Por el contrario, un escándalo de menor entidad jurídica puede ser altamente desestabilizador si activa un proceso de imputación directa, investigación judicial, ofensiva congresal y pérdida de aliados. La convertibilidad del escándalo de una amenaza reputacional a una amenaza institucional es, por tanto, el punto decisivo. No es lo mismo el daño a la imagen presidencial que el inicio de un proceso de sanción o vacancia.

Este artículo operacionaliza esa diferencia mediante dos variables: la amenaza latente de cada episodio de crisis y la afectación presidencial. La afectación directa identifica noticias en las que el presidente aparece como el protagonista o responsable central del conflicto. La afectación indirecta capta situaciones en las que el episodio involucra al gabinete, partido, familiares, aliados, operadores o entorno político del gobierno. La ausencia de afectación presidencial relevante registra hechos conflictivos del sistema político que no comprometen de manera sustantiva al jefe de Estado.

La prensa cumple una función clave en la definición de las amenazas y en la presidencialización de las crisis. Durante las crisis políticas, el proceso de encuadre no solo

organiza la información disponible, sino que también contribuye a estructurar el campo de responsabilidad. Boin, Hart y McConnell, (2009) plantean que los actores disputan los encuadres, buscando definir la naturaleza del evento, su gravedad, sus causas y sus responsables. Una crisis puede minimizarse o convertirse en una oportunidad para demandar cambios. An y Gower (2009) muestran que el encuadre de atribución de responsabilidad es especialmente frecuente en la cobertura mediática de las crisis.

2.4. Las amenazas de Castillo y Boluarte

Castillo y Boluarte permiten comparar dos configuraciones distintas de crisis presidencial dentro de un mismo sistema político. En la presidencia de Castillo, los escándalos no aparecieron como episodios aislados, sino como parte de una narrativa más amplia sobre la incapacidad, la improvisación, la corrupción y la falta de autoridad de su gobierno. La atribución de responsabilidad estuvo asociada, desde el primer momento, a las cualidades del líder.

El caso de Boluarte presenta una lógica diferente. Su gobierno nació con una ilegitimidad de origen. La protesta posterior a la sucesión, especialmente en el sur andino, instaló una amenaza social de alta intensidad, asociada a la fuerte represión. Informes de organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos documentaron la gravedad de la respuesta estatal y mantuvieron abierta la discusión sobre su responsabilidad al mando de las fuerzas de seguridad¹. Boluarte enfrentó una crisis de legitimidad y múltiples cuestionamientos, pero su supervivencia dependió de una coalición parlamentaria interesada en protegerla o, al menos, en evitar una salida que alterara los equilibrios alcanzados.

Esta diferencia permite hipotetizar que la amenaza reputacional y social de una crisis no basta para producir vulnerabilidad presidencial terminal si no se articula con una amenaza institucional efectiva.

El marco desarrollado permite traducir la discusión teórica en categorías observables. La variable “tipo de crisis” identifica el desencadenante predominante de cada crisis: desastre, crisis de gestión, crisis económica, conflicto social, enfrentamiento institucional, disputa interna, escándalo, polémica, enfrentamiento electoral o judicialización. La variable “tipo de amenaza” identifica el efecto potencial de cada episodio: amenaza técnica, normativa, reputacional, institucional o social. La primera responde qué clase de acontecimiento aparece y la segunda por qué ese acontecimiento es políticamente importante.

La amenaza técnica se refiere a la capacidad de gestión y desempeño del gobierno en la gestión de las políticas públicas. La amenaza normativa remite a la legalidad, a las reglas de conducta esperable por los actores y a las sanciones previstas. La amenaza reputacional afecta a la credibilidad, la imagen pública, la autoridad moral o la confianza en el acusado. La amenaza institucional compromete relaciones entre poderes, reglas constitucionales,

¹ Amnistía Internacional, 2023, 2024; Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2023; Human Rights Watch, 2023; Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2023

procedimientos de remoción o continuidad del mandato. La amenaza social se refiere a la potencialidad de desencadenar protestas, o conflictividad social que altere el orden público. Estas amenazas no se construyen a partir de indicadores externos al proceso comunicativo, sino que son representaciones mediáticas codificadas a partir del contenido de las portadas.

La variable de afectación presidencial permite identificar el grado de presidencialización de cada episodio. Una crisis puede afectar directamente al presidente, afectarlo indirectamente a través de su entorno o no comprometerlo de manera relevante. Finalmente, la variable “tipo de escándalo” clasifica el núcleo de transgresión dominante: corrupción, abuso de poder, escándalo moral o privado, escándalo discursivo u otros casos.

A partir de estas variables se construye el análisis empírico para comparar cómo los medios encuadraron las crisis de Castillo y Boluarte, qué tipos de amenaza predominaron, qué episodios se volvieron directamente presidenciales y cómo se articularon las crisis reputacionales en conflictos institucionales.

3. Metodología

El estudio utiliza una base de datos original compuesta por 9.033 noticias publicadas en las portadas de *El Comercio* y *La República*². Para cada edición disponible se registraron las tres noticias de mayor relevancia de cada periódico. La base comprende 2.979 noticias correspondientes a la presidencia de Castillo y 6.054 correspondientes a la presidencia de Boluarte.

La unidad de análisis es la noticia individual de portada. Cada observación contiene la fecha, el periódico, la posición y relevancia de la noticia, el copete, el titular y la bajada informativa. La selección de portadas permite observar la jerarquización periodística de las crisis y los escándalos, en lugar de medir únicamente el volumen total de artículos publicados en las ediciones impresas.

La construcción inicial de la base combinó dos procesos desarrollados en Google Colab. En la primera etapa se procesaron las imágenes de las portadas mediante reconocimiento óptico de caracteres y herramientas de la API de Gemini. Este procedimiento permitió la extracción y codificación de la información relevante. En una segunda etapa, se utilizó la API de OpenAI para aplicar y normalizar las categorías analíticas del codebook. Los modelos recibieron el texto disponible de cada noticia y las definiciones operacionales de las variables.

La codificación asistida incluyó las siguientes variables centrales:

- **Existencia de crisis o relevancia político-conflictiva (A11):** variable puerta que determina si la noticia se refiere o no a una crisis.

² Sobre ese total, 6.764 noticias fueron codificadas como noticias referidas a crisis, de las cuales 2.306 corresponden a Castillo y 4.458 a Boluarte. El periodo de observación se extiende desde el 28 de julio de 2021 hasta el 9 de octubre de 2025 (1535 fechas únicas).

- **Tipo de crisis (A14):** admite hasta tres categorías. La primera representa el tipo predominante; la segunda y la tercera solo deben emplearse cuando la noticia contiene dimensiones adicionales sustantivamente relevantes. Las categorías distinguen desastres, polémicas, escándalos, crisis de gestión, crisis económicas, conflictos, enfrentamientos, enfrentamientos electorales, disputas y judicialización.
- **Tipo de amenaza (A15):** identifica hasta tres efectos potenciales de la crisis sobre el sistema político o sus actores.
- **Afectación presidencial (A16):** distingue si el acontecimiento afecta directamente al presidente, indirectamente, o no produce una afectación relevante.
- **Tipo de escándalo (A17):** identifica la transgresión predominante y distingue tipos de escándalos.

La validación combinó una muestra estratificada y una revisión dirigida de episodios sustantivamente importantes. En total se revisaron manualmente 1.147 noticias, con una muestra estratificada de 280 noticias³, una revisión dirigida de 789 noticias pertenecientes a episodios centrales o secundarios⁴ y se incorporaron 78 noticias identificadas mediante reglas automáticas de inconsistencia⁵.

La revisión humana recodificó de manera separada las variables centrales. Los códigos originales y humanos se almacenaron en columnas diferentes para permitir su comparación posterior⁶.

Para cada variable se calculó el acuerdo porcentual y el kappa de Cohen. El acuerdo observado corresponde a la proporción de noticias en las que la codificación original y la humana coinciden. El kappa se complementó con Gwet AC1 y el alfa nominal de Krippendorff. Esta decisión responde a que el kappa puede comportarse de manera contraintuitiva cuando una categoría es muy prevalente. También se calcularon Scott π y el coeficiente de Brennan–Prediger como pruebas complementarias.

Sobre las 1.147 noticias auditadas, A11 alcanzó 96,3% de acuerdo, un kappa de 0,812 y un Gwet AC1 de 0,953. La categoría primaria de A14 obtuvo 71,6% de acuerdo y un kappa de 0,655. A15 primaria alcanzó 75,0% de acuerdo y un kappa de 0,670. A16 presentó 83,8% de acuerdo y un kappa de 0,766, mientras que A17 registró 80,6% de acuerdo y un kappa de 0,689.

Los resultados globales son deliberadamente conservadores porque el conjunto auditado sobrerrepresenta episodios complejos y observaciones previamente identificadas como problemáticas. Por ello, la estimación principal se obtuvo de la muestra estratificada de 280

³ 120 noticias originalmente clasificadas como no crisis, 80 noticias de crisis con un evento previamente asignado y 80 noticias de crisis sin evento. La selección consideró los dos presidentes, los dos periódicos, la jerarquía de la noticia y diferentes categorías de crisis y escándalo.

⁴ Se revisaron todas las observaciones asociadas con los casos que sostienen el argumento central del artículo para evitar que errores dentro de los episodios de mayor importancia quedaran ocultos.

⁵ Este componente incluyó noticias con A11=1 sin categorías primarias, noticias clasificadas como escándalo sin tipo de escándalo, códigos no definidos y problemas en la asignación presidencial.

⁶ Dado que la validación fue realizada por una persona, los resultados no se denominan confiabilidad intercodificador y se presentan como concordancia entre la codificación asistida por modelos de lenguaje y la validación humana.

noticias. En esta muestra, los kappas fueron 0,803 para A11, 0,748 para A14 primaria, 0,813 para A15 primaria, 0,744 para A16 y 0,707 para A17⁷.

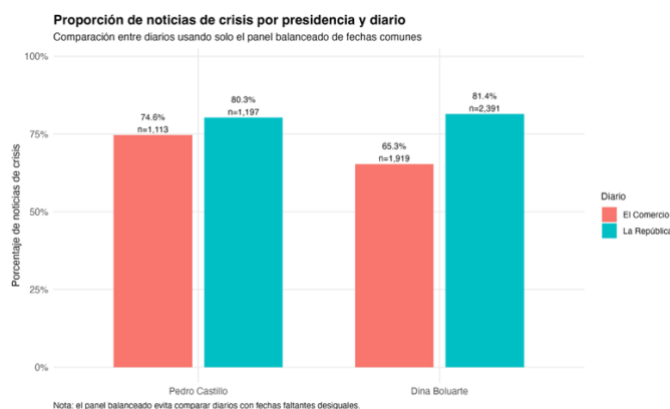
4. Resultados

4.1. La acumulación de crisis como patrón del ciclo

El primer resultado relevante es que la crisis no aparece como un fenómeno excepcional, sino como una condición persistente del ciclo político analizado. Las portadas de *El Comercio* y *La República* muestran que tanto Castillo como Boluarte gobernaron bajo una alta densidad de noticias político-conflictivas. Sin embargo, la comparación no puede reducirse al volumen absoluto de crisis, porque ambos gobiernos tienen duraciones distintas y porque Boluarte concentra un periodo más largo de observación.

La Figura 1 muestra que la presencia de crisis fue elevada en ambos gobiernos y en ambos periódicos, mostrando que se trata de una agenda de crisis sostenida. A la vez, la comparación entre presidentes, muestra que el punto central es que la caída de Castillo y la supervivencia prolongada de Boluarte no se explican simplemente por “más” o “menos” crisis. Ambos gobiernos estuvieron expuestos a una agenda intensa. Entonces, ¿qué es lo que cambió en la composición de esa agenda entre un presidente y otro?

Figura 1. Noticias de crisis por presidencias y por diario



Fuente: Elaboración propia

4.2. Dos perfiles de crisis distintos

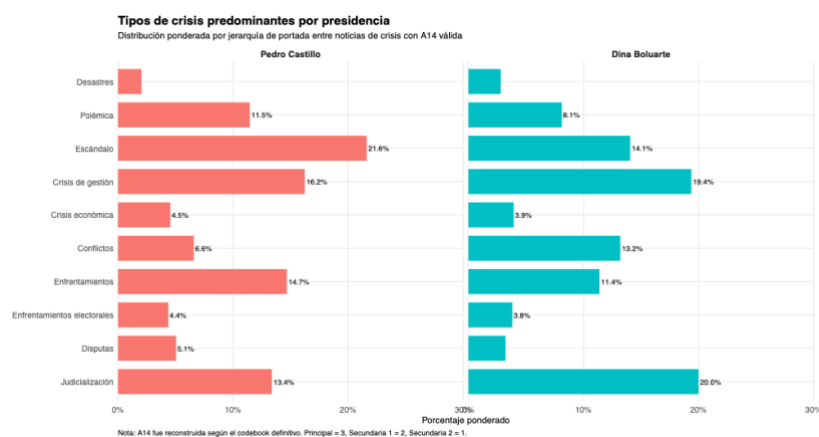
La Figura 2 permite observar la primera diferencia sustantiva entre ambos gobiernos. En Castillo, el peso relativo de los escándalos es mayor que en Boluarte. También tienen un lugar importante las crisis generadas por enfrentamientos entre partidos políticos y poderes

⁷ En el análisis multietiqueta de la muestra estratificada, A14 alcanzó una coincidencia exacta sin orden de 0,786, un Jaccard medio de 0,826 y un kappa de conjuntos de 0,735. A15 obtuvo una coincidencia exacta de 0,825, un Jaccard de 0,860 y un kappa de conjuntos de 0,774.

del Estado y la judicialización. Esto es consistente con una presidencia que fue rápidamente encuadrada como problemática por la combinación de improvisación gubernamental, denuncias de corrupción, alta rotación ministerial y conflicto con el Congreso.

Boluarte, en cambio, enfrentó crisis vinculadas a la gestión (sobre todo relacionadas a temas de seguridad) y los conflictos con distintos sectores de la sociedad. La judicialización de los procesos también está presente. A diferencia de Castillo, no se trata solo de escándalos que se acumulan alrededor de la presidenta hasta cercarla, sino de una crisis de gobierno más profunda, prolongada, e institucionalizada entre múltiples arenas.

Figura 2. Tipos de crisis predominantes por presidencias



Fuente: Elaboración propia

La comparación muestra, por tanto, que Castillo y Boluarte comparten una condición de crisis permanente, pero no el mismo perfil de crisis. En Castillo, el escándalo aparece como un mecanismo más central de erosión. En Boluarte, la crisis parece adoptar una forma más dispersa y sostenida, sin producir un desenlace de interrupción presidencial.

Si los tipos de crisis que enfrentaron fueron diferentes en su composición, ¿se tradujeron en amenazas también distintas, con mayor probabilidad de riesgo institucional para Castillo que para Boluarte?

4.3. Tipos de amenaza: la centralidad de lo institucional

La Figura 3 muestra que la amenaza institucional domina en ambos gobiernos, por lo que la respuesta parecería ser no. Sin embargo, hay algunas diferencias que importan.

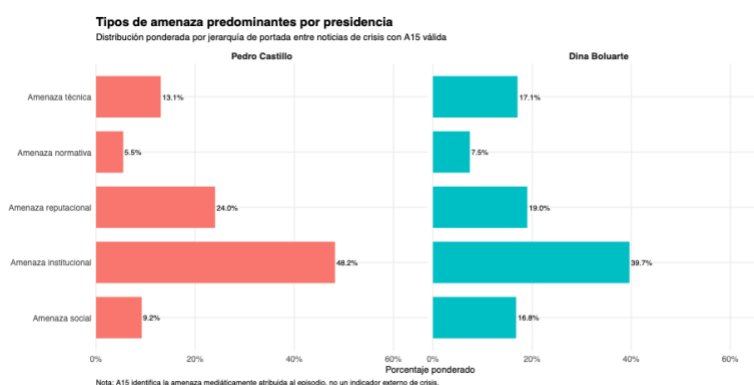
En Castillo, la amenaza institucional tiene un peso particularmente alto y se combina con una amenaza reputacional también alta. Esta combinación es políticamente sensible porque cuando la pérdida de credibilidad o las denuncias de irregularidad se conectan con los

procedimientos institucionales de sanción, la crisis deja de ser solo un problema de imagen y se vuelve una posible ruta para la caída presidencial.

En Boluarte, la amenaza institucional sigue siendo muy elevada, pero aumenta el peso relativo de la amenaza social y técnica. Esto refleja una agenda más ligada a las protestas callejeras de los movimientos sociales y al desempeño gubernamental, sobre todo en materia de seguridad, comunicación y gestión pública.

En Castillo, la amenaza institucional aparece más asociada a un proceso de imputación de responsabilidad directa (presidencialización) y de sanción. En Boluarte, la amenaza institucional convive con otros registros de conflicto y no siempre se traduce en afectación presidencial directa. Esa distinción será central para interpretar por qué dos gobiernos con alta conflictividad institucional pueden tener resultados políticos distintos.

Figura 3. Amenazas predominantes por presidencias.



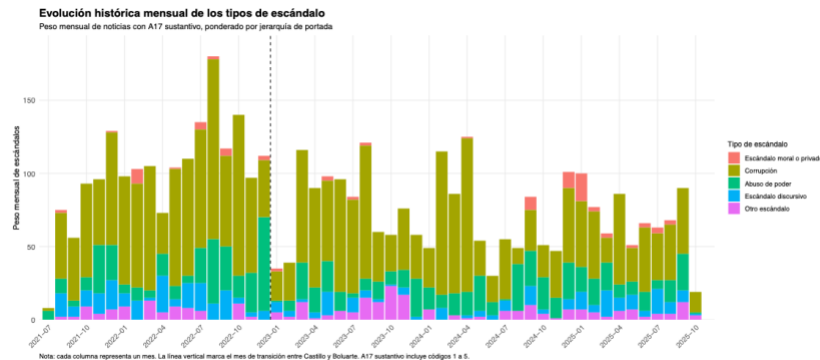
Fuente: Elaboración propia

4.4. Escándalos: La corrupción extendida

Los escándalos constituyen un tipo particular de crisis que se desencadenan por el quebrantamiento de una norma específica, que se hace público y que genera reacciones de indignación. El tipo de norma vulnerada caracteriza el tipo de escándalo.

En la Figura 4 se observa la evolución histórica mensual de los tipos de escándalo. El patrón más claro es la centralidad de los escándalos de corrupción como tipo dominante de transgresión, tanto en Castillo como en Boluarte. No obstante, la temporalidad es distinta. En Castillo, los escándalos tienen una curva creciente a lo largo del 2021 y 2022, con picos que coinciden con el deterioro progresivo de su gobierno y la acumulación de denuncias contra su entorno. En Boluarte, los escándalos no aparecen como una explosión breve ni incremental, sino como una serie persistente que se reactiva durante distintos momentos de su mandato, con aumentos y caídas.

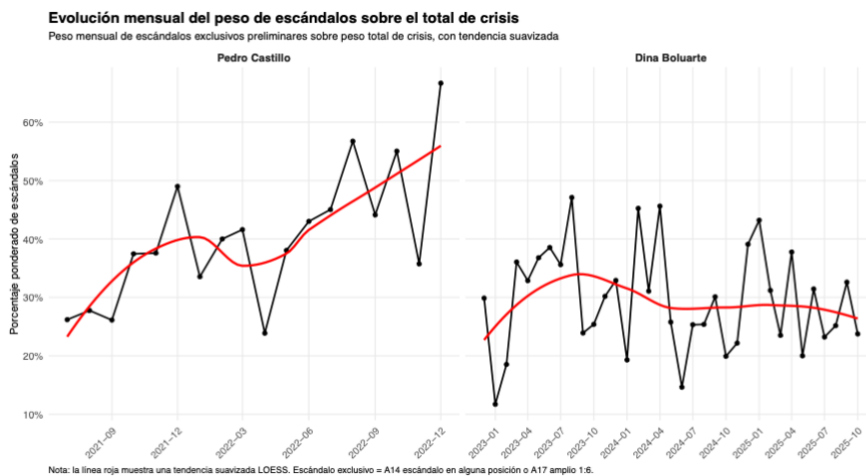
Figura 4. Evolución de los escándalos por tipo según presidencia



Fuente: Elaboración propia

La Figura 5 complementa esta lectura al mostrar la evolución del peso de los escándalos sobre el total de crisis. En Castillo, los escándalos ocupan una proporción creciente dentro del universo de crisis hacia la fase final de su gobierno (curva ascendente con aceleración final). En Boluarte, el patrón es menos lineal: los escándalos tienen picos relevantes, pero se alternan con otros tipos de crisis, especialmente con amenazas sociales y técnicas. Es decir, la naturaleza de su exposición fue más heterogénea y menos lineal en el proceso de presidencialización del escándalo en el camino hacia la vacancia.

Figura 5. Peso de los escándalos sobre el total de crisis a lo largo del período 2021-2025



Fuente: Elaboración propia

Los escándalos importan, pero no todos los escándalos se vuelven igualmente peligrosos para la presidencia. Su capacidad de erosión depende de si logran conectar tres elementos: publicidad de la transgresión, imputación presidencial (directa) y una ruta institucional clara de sanción. Castillo aparece más expuesto a esa convergencia. En Boluarte, los escándalos conviven con un entorno más amplio de crisis, distribuidos entre su entorno, el gabinete, familiares de la presidenta, el Congreso u otros actores institucionales de control.

En la política peruana reciente, los escándalos no son hechos excepcionales o disruptivos cuya dramatización se resuelve en la esfera público-política mediática (Thompson, 1995, 2003) , sino que sirven de narrativas donde se disputa la institucionalidad y los equilibrios de los poderes, por medio de acciones que pueden adoptar los actores, como las censuras, las vacancias, recomposiciones congresales o ministeriales y finalmente, la misma supervivencia presidencial o la clausura del Congreso.

Si la clave, entonces, está en la composición de la crisis, ¿cómo se articula esa convergencia que se convierte en la tormenta perfecta para la caída?

4.5. Trayectoria temporal de la crisis

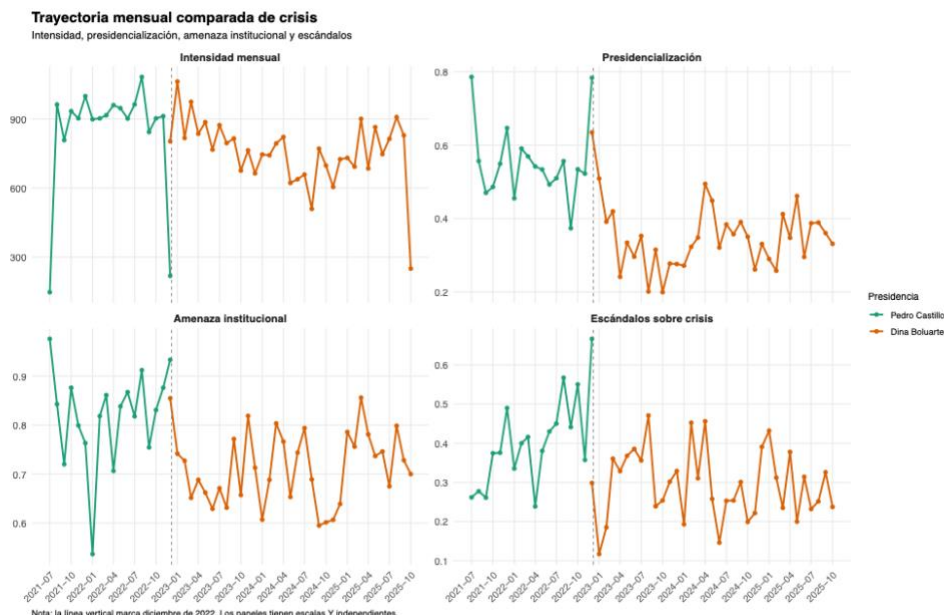
La Figura 6 resume la trayectoria comparada de la intensidad (volumen de las crisis), la presidencialización (cercanía de la crisis al presidente), la amenaza institucional y la presencia de escándalos políticos (sobre el total de las crisis).

En Castillo, la trayectoria tiende a mostrar una mayor concentración hacia la fase final del gobierno. La crisis se vuelve más densa cuando los escándalos, la afectación presidencial y la amenaza institucional empiezan a superponerse.

En Boluarte, la serie muestra una crisis más prolongada y menos terminal. Hay picos de intensidad y momentos de alta amenaza institucional, pero no todos se traducen en presidencialización equivalente. Es decir, hay desacoples entre el riesgo institucional, la exposición mediática y la atribución de responsabilidad directa.

Boluarte enfrenta una agenda de crisis sostenida, pero buena parte de esa conflictividad se procesa como crisis de legitimidad (mínimo apoyo social), conflicto social y enfrentamiento difuso (sobre todo vinculado a los enfrentamientos entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, y menos con el Congreso). Una vez más, el deterioro persiste sin colapsar, por las coaliciones o arreglos institucionales capaces de sostener la continuidad.

Figura 6. Comparación de las trayectorias por presidencias



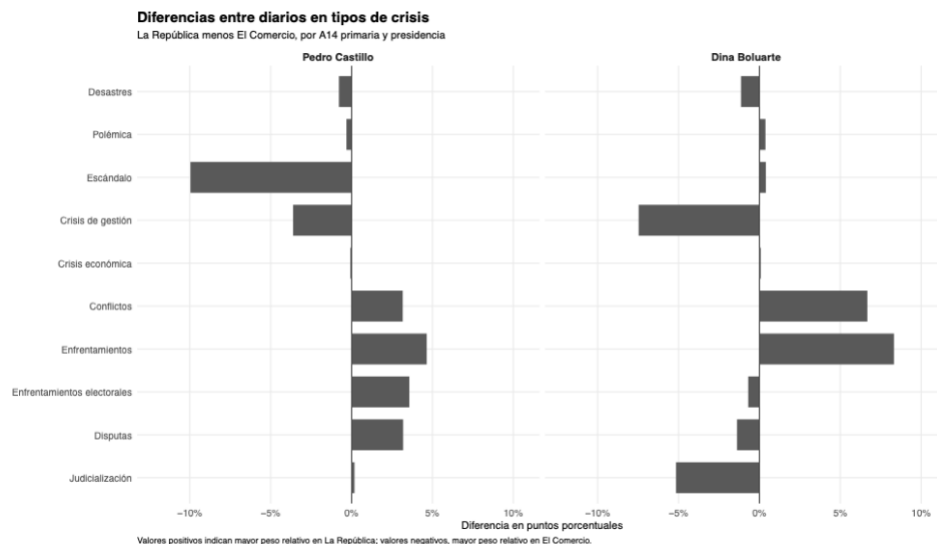
Fuente: Elaboración propia

4.6. Diferencias entre diarios: encuadres selectivos

Las figuras 7 y 8 permiten comparar *El Comercio* y *La República*. El objetivo no es identificar qué diario fue “más crítico” en términos generales, sino observar diferencias selectivas de encuadre. Ambos medios participan de una agenda compartida de crisis, pero jerarquizan de manera diferente ciertos tipos de crisis y amenazas.

La Figura 7 muestra que las diferencias entre diarios varían según el tipo de crisis. *La República*, desde una perspectiva más de izquierda, tiende a otorgar un mayor peso relativo a la cobertura de asuntos sociales como conflictos, protestas callejeras, o judicialización. *El Comercio*, desde un enfoque más de derecha, aparece asociado al tratamiento de asuntos de gestión, la institucionalidad o los escándalos, dependiendo de la presidencia. La diferencia no es estable ni unidireccional y cambia según el gobierno y la categoría de crisis.

Figura 7. Diferencia en la cobertura de las crisis según tipo por diario

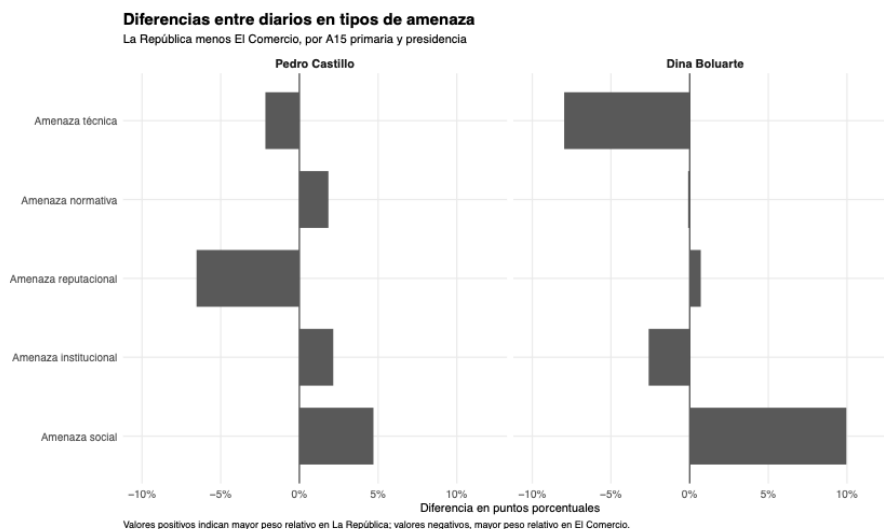


Fuente: Elaboración propia

La Figura 8 muestra cómo los diarios organizan las amenazas, ya sean reputacionales, institucionales, sociales, técnicas o normativas. Lo importante aquí es el encuadre que los diarios les dan a los hechos. Esto es, cómo se orienta la lectura política de los mismos para, finalmente, construir un entendimiento sobre las trayectorias en las que dichos hechos convergen. Un mismo episodio puede ser leído como una falla técnica de gestión, un daño reputacional, un conflicto social o una amenaza institucional. La comparación entre diarios permite ver cómo esa operación de traducción no es neutra.

La prensa funciona como una arena de jerarquización y de atribución. No causa por sí sola la crisis, pero sí organiza públicamente qué problemas se vuelven prioritarios, qué amenazas se destacan y qué actores aparecen como los responsables.

Figura 8. Tipo de amenaza identificada por los medios por presidencias.



Fuente: Elaboración propia

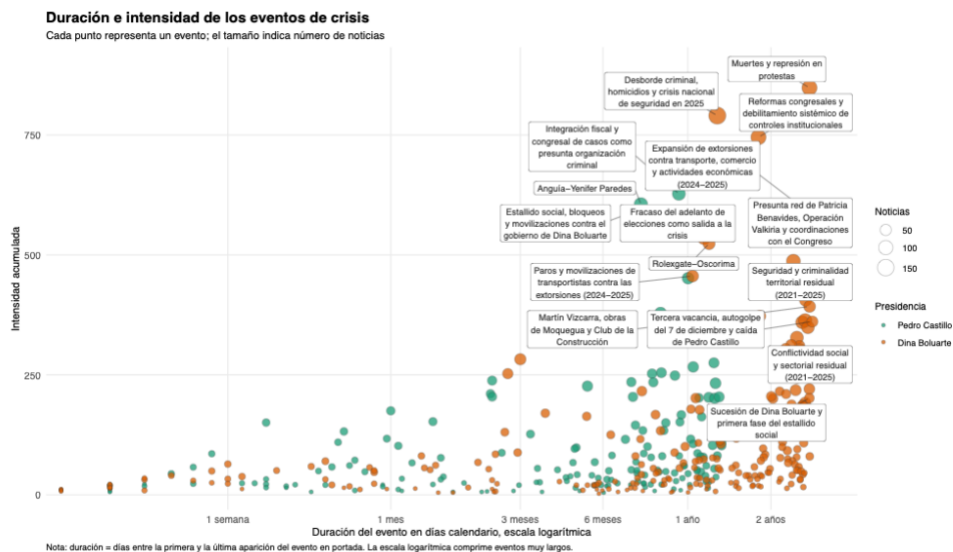
4.7. Duración e intensidad de la crisis

La Figura 9 permite distinguir la duración y la intensidad mediática de los eventos críticos. El eje horizontal mide la duración del evento en días calendario, es decir, la distancia entre la primera y la última aparición del episodio en portada. La escala es logarítmica para evitar que los eventos largos aplasten visualmente a los episodios breves. El eje vertical mide la intensidad acumulada en la cobertura.

Esta figura permite observar que no todos los eventos relevantes siguen la misma lógica. Algunos son breves y muy intensos; otros son largos, reactivados y de intensidad acumulada alta; otros permanecen durante meses con baja intensidad relativa. Esta distinción es fundamental porque evita confundir el número de noticias con la gravedad política que generan. Un episodio puede ser visible durante mucho tiempo sin convertirse en una amenaza presidencial decisiva, mientras que otro puede concentrar en pocas semanas altos niveles de prominencia, imputación y amenaza institucional.

En Castillo, varios eventos de alta intensidad se concentran en torno a escándalos, redes de corrupción, conflictos con el Congreso e investigaciones contra el entorno presidencial. En Boluarte, se observa una mayor presencia de eventos extensos referidos sobre todo a la represión de las protestas, crisis de seguridad y escándalos persistentes. La crisis de Boluarte no necesariamente es menos intensa, pero sí aparece más distribuida temporalmente y menos concentrada en una única secuencia terminal.

Figura 9. Duración e intensidad de los eventos de crisis



Fuente: Elaboración propia

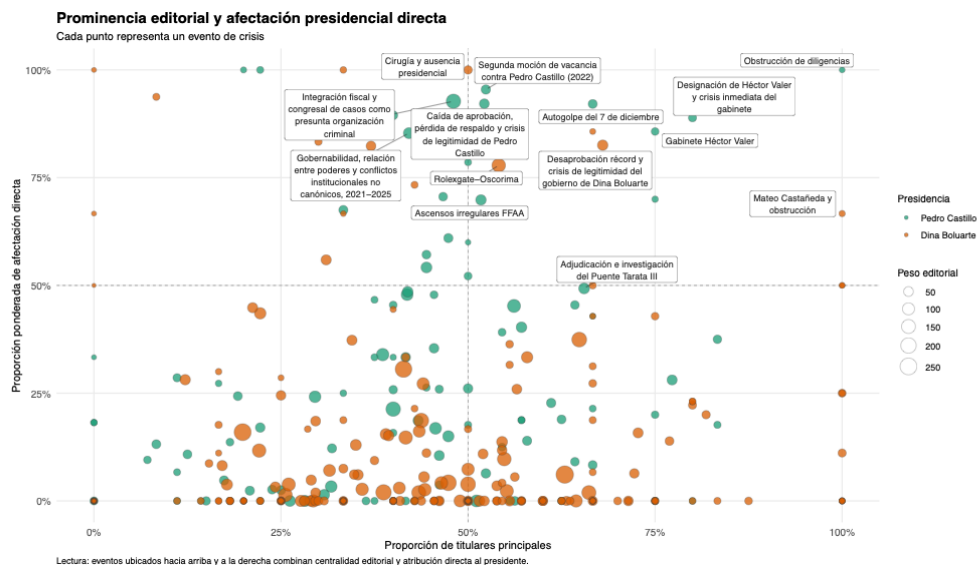
4.8. Prominencia editorial y afectación presidencial directa

La Figura 10 muestra la relación entre la prominencia editorial y la afectación presidencial directa. Los eventos situados hacia arriba y a la derecha combinan dos rasgos relevantes: ocupan una proporción importante de titulares principales y, al mismo tiempo, concentran atribución directa sobre la presidencia.

Este gráfico ayuda a visualizar cómo la presidencialización no es solo una categoría de contenido (¿quién es el actor principal de la crisis?), sino también una forma de jerarquización de las noticias. Cuando un evento afecta directamente al presidente y además ocupa posiciones principales en portada, adquiere mayor capacidad de estructurar la agenda pública. La prensa no convierte automáticamente ese evento en una amenaza de salida, pero sí aumenta su visibilidad y lo presenta como un problema central para la autoridad presidencial.

En Castillo, esta convergencia aparece con más claridad en eventos donde la confrontación institucional se aproxima al presidente. En Boluarte, la prominencia se distribuye entre distintos tipos de crisis, pero no siempre coincide con afectación presidencial directa. Esto vuelve a mostrar que la supervivencia de Boluarte no se explica por ausencia de crisis, sino por una forma distinta de distribución de la imputación.

Figura 10. Prominencia editorial y afectación presidencial directa



Fuente: Elaboración propia

4.9. La matriz de riesgo mediático-político: presidencialización y amenaza institucional

La Figura 11 presenta una matriz que cruza el índice de presidencialización del evento con la proporción de amenaza institucional. Los eventos ubicados arriba y a la derecha son los de mayor riesgo mediático-político ya que combinan alta imputación presidencial con alta amenaza institucional.

El análisis estadístico confirma esta lectura⁸. A nivel evento, la relación entre presidencialización y amenaza institucional es positiva en ambos gobiernos, y no hay evidencia robusta de que la pendiente sea estructuralmente distinta entre Castillo y Boluarte. En el modelo lineal simple, la pendiente para Castillo es 0,168 y para Boluarte 0,122; ambas son estadísticamente significativas, pero la diferencia entre pendientes no lo es. La prueba bootstrap también confirma que la diferencia de pendientes cruza cero.

La diferencia relevante aparece en la concentración de eventos dentro del cuadrante de alto riesgo. Bajo Castillo, 62 de 149 eventos se ubican en ese cuadrante, es decir, 41,6%. Bajo

⁸ La pregunta sería: ¿La relación entre presidencialización del evento y amenaza institucional es distinta bajo Castillo y bajo Boluarte? La estimación central sería:

Amenaza institucional del evento = $\beta_0 + \beta_1$ Presidencialización + β_2 Boluarte + β_3 Presidencialización $\times$ Boluarte + controles + error
La clave es el coeficiente β_3 . Si es estadísticamente distinguible de cero, hay evidencia de que la pendiente entre presidencialización y amenaza institucional cambia entre Castillo y Boluarte. La lectura sería:

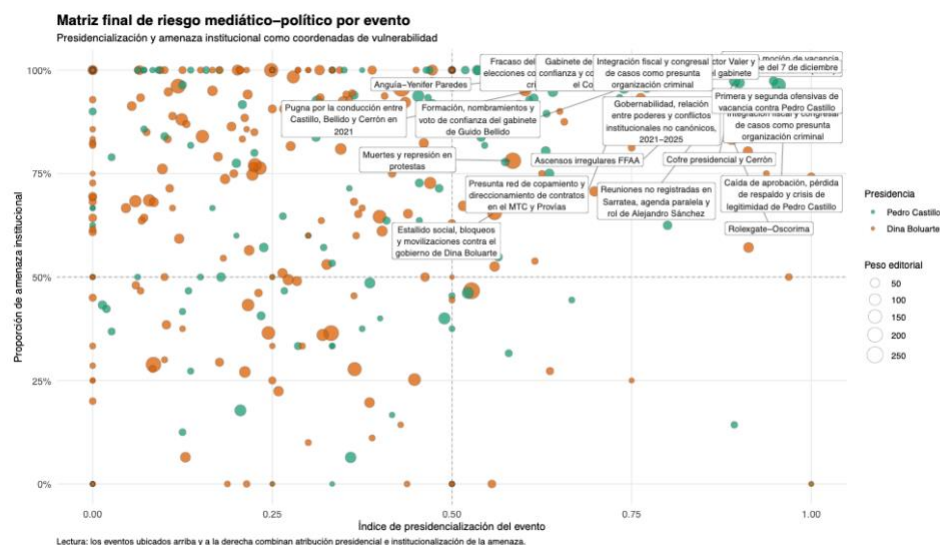
β_1 = relación entre presidencialización y amenaza institucional bajo Castillo.

β_2 = diferencia de nivel/base entre Boluarte y Castillo cuando la presidencialización es baja.

β_3 = diferencia de pendiente: cuánto cambia la relación presidencialización-amenaza institucional bajo Boluarte respecto de Castillo.

Boluarte, lo hacen 52 de 210 eventos, equivalentes a 24,8%. La prueba exacta de Fisher indica que esta diferencia es estadísticamente significativa, con $*p* = 0,000850$ y un odds ratio de 0,463 para Boluarte respecto de Castillo. El modelo logístico refuerza la misma lectura: controlando por peso editorial y número de noticias, los eventos bajo Boluarte tienen aproximadamente 0,41 veces las probabilidades de ubicarse en el cuadrante de alto riesgo en comparación con los eventos de Castillo.

Figura 11. Matriz de riesgo mediático-político por evento



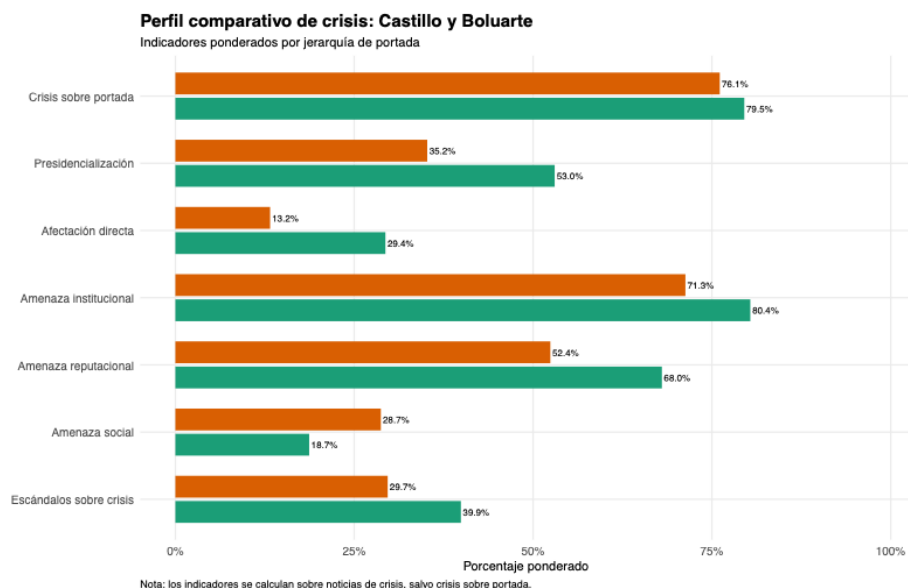
Fuente: Elaboración propia

Este resultado permite concluir que la presidencialización de la crisis no “produce” una amenaza institucional más intensa en Castillo. Lo que ocurre es que la estructura de eventos de Castillo concentra más episodios donde ambas dimensiones aparecen simultáneamente altas. En Boluarte, en cambio, hay numerosos eventos con amenaza institucional elevada, pero una parte importante de ellos permanece en niveles bajos o medios de presidencialización, sugiriendo que la amenaza institucional puede ser intensa sin convertirse necesariamente en una crisis directamente presidencializada.

4.10. Comparación final: perfiles de crisis y trayectorias de supervivencia

La Figura 12 ofrece el perfil comparativo de ambas presidencias. Castillo aparece más asociado a la convergencia entre escándalo, amenaza reputacional, presidencialización e institucionalización del conflicto. Boluarte aparece más asociada a una crisis prolongada, social e institucionalmente persistente, pero más dispersa en términos de imputación presidencial.

Figura 12. Comparación de perfiles de crisis y trayectorias por presidencias



Fuente: Elaboración propia.

Si la caída presidencial dependiera solo del volumen de crisis, Boluarte debería haber enfrentado un desenlace similar o incluso más rápido que Castillo. Pero los resultados muestran que el volumen no alcanza. La clave está en la forma que adopta la crisis: qué tipo de crisis predomina, qué amenaza se le atribuye, cuánto se aproxima al presidente, qué visibilidad editorial recibe y si logra o no conectarse con una ruta institucional de salida.

En Castillo, esa convergencia fue más frecuente. En Boluarte, la crisis fue severa y persistente, pero muchas veces operó como erosión sin alternativa de sustitución. Esta diferencia es consistente con el argumento de que la cobertura mediática organiza el entorno interpretativo de la crisis, pero no reemplaza las condiciones institucionales que convierten la erosión en interrupción presidencial.

En síntesis, los resultados muestran tres cosas. Primero, la crisis peruana reciente es serial: no se cierra con la sucesión presidencial, sino que se reorganiza. Segundo, los tipos de crisis se traducen en amenazas de manera sistemática: los escándalos tienden a activar daño reputacional; la judicialización y los enfrentamientos entre poderes tienden a institucionalizar el conflicto; mientras que los conflictos sociales incrementan la amenaza social, sin que necesariamente se traduzcan en crisis institucionales. Tercero, la presidencialización es el mecanismo que permite diferenciar una crisis del sistema de una crisis presidencial. Castillo cae en un contexto donde los escándalos, la imputación presidencial y la amenaza institucional convergen con mayor frecuencia.

Este análisis debe mantenerse en clave prudente, porque los datos analizan portadas y representaciones mediáticas. Por ello, los resultados no prueban causalmente por qué un presidente cae y otro sobrevive. Sí muestran, con evidencia sistemática, cómo la prensa

gráfica organiza la imputación, jerarquiza amenazas y vuelve visibles ciertas rutas de vulnerabilidad presidencial. Esa es la contribución empírica central de esta sección.

Sin embargo, si una crisis es una disputa de encuadres, queda todavía una pregunta sin responder: ¿Qué hicieron de distinto Castillo y Boluarte para responder a esas crisis reputacionales? ¿Cómo se defendieron ante las acusaciones de escándalos políticos? ¿Hay un patrón que los diferencie y ayude a explicar la capacidad de construir consensos parlamentarios que funcionen de escudos ante la caída? O a la inversa, ¿Hay una forma de defenderse que acelera la confrontación de poderes precipitando la caída presidencial? Eso vamos a analizar en la sección siguiente.

5. Las respuestas defensivas ante los escándalos políticos

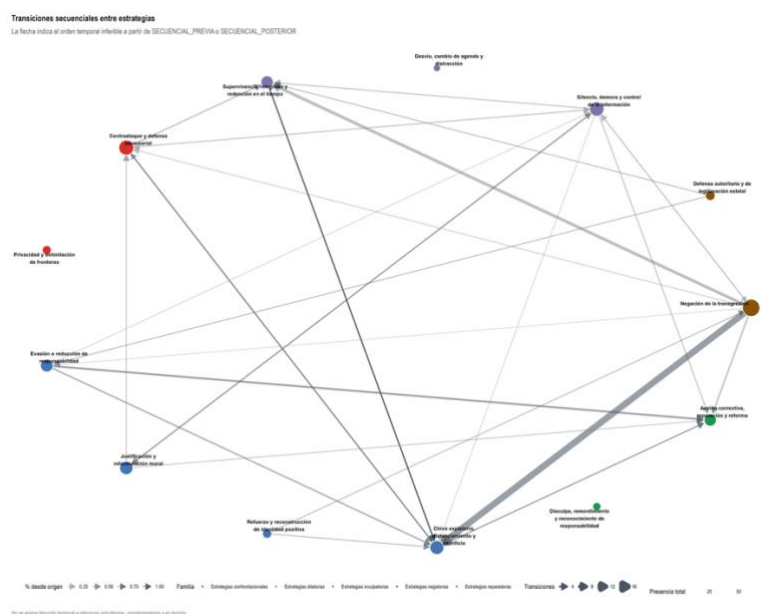
5.1. Marco metodológico

Para poder dar respuestas a esas preguntas, la estrategia metodológica partió de una base longitudinal integrada por 134 escándalos y 2.305 noticias de portada, vinculadas mediante identificadores comunes de evento, noticia y macrocaso. Para comparar los estilos presidenciales se delimitó un subuniverso homogéneo de 65 escándalos directamente relacionados con los ejecutivos de Pedro Castillo (44 casos) y Dina Boluarte (21 casos), excluyendo del contraste principal los escándalos congresales, judiciales o partidarios. Cada escándalo se trató como un proceso y no como un acontecimiento aislado: se reconstruyeron su cronología, intensidad mediática, períodos de desaparición y reactivación, solapamiento con otros casos, actores acusados y defensores, y hasta tres estrategias defensivas simultáneas o sucesivas. Las noticias fueron ordenadas en siete fases comparables: revelación, respuesta inicial, expansión de evidencia, investigación institucional, escalada política, cierre o supervivencia y reactivación. Esto permitió observar no solo qué estrategia apareció, sino también en qué momento, quién la produjo y con qué otras respuestas se combinó.

La comparación entre presidentes se desarrolló en tres niveles complementarios. Primero se calcularon las frecuencias y proporciones de las trece estrategias definidas en un *codebook* cerrado, sus familias generales, las estrategias dominantes, los tipos de unidad defensiva, el nivel organizativo de la respuesta y el número de actores movilizados por caso. Segundo, se incorporó la dimensión temporal mediante la posición de cada estrategia dentro de la trayectoria y su distribución por fases. Tercero, para reducir el sesgo derivado de que Castillo y Boluarte enfrentaron composiciones distintas de escándalos, se realizaron comparaciones ajustadas y ponderadas considerando el tipo de transgresión, la afectación presidencial directa, la intensidad y duración mediática y la pertenencia a macrocasos. Los contrastes combinaron diferencias porcentuales, pruebas exactas de Fisher, Wilcoxon, tamaños de efecto, modelos logísticos con reducción de sesgo, PERMANOVA, análisis de clusters y validación cruzada. Esta estrategia mostró que la diferencia entre los presidentes reside menos en utilizar repertorios completamente distintos que en la organización, coordinación, densidad actoral y temporalidad de la estrategia defensiva.

Finalmente, la eficacia defensiva se evaluó mediante un codebook específico que mantuvo separados cuatro resultados principales: contención mediática, supervivencia política, expansión institucional y desenlace judicial, incorporando además las transgresiones defensivas de segundo orden (mentira, obstrucción, represalia o encubrimiento) y una dimensión reputacional cuando existía información comparable. La contención mediática se midió mediante la evolución del peso de portada, el tiempo hasta la desaparición y las reactivaciones posteriores; la supervivencia política mediante permanencia a 30, 90 y 180 días, renunciadas, censuras o destituciones; la expansión institucional mediante el nivel máximo alcanzado por la imputación; y el resultado judicial mediante archivos, medidas cautelares, acusaciones, juicios o condenas. Para evitar circularidad, la estrategia dominante se utilizó únicamente como descripción de la trayectoria completa: las asociaciones con los resultados se basaron en la primera defensa y en las estrategias observadas antes del desenlace. Esta restricción fue especialmente importante para la supervivencia, el sacrificio de subordinados y la acción correctiva.

Los resultados muestran que Pedro Castillo y Dina Boluarte compartieron una estrategia defensiva básica basada en la combinación y transición de distintas respuestas defensivas, las cuales pueden observarse en la Figura 13. Entre ellas, predominó el uso de la negación, el contraataque, el control informativo y el distanciamiento de terceros (uso de chivos expiatorios o sacrificio de subordinados).



Las diferencias en la frecuencia bruta en el uso de las familias defensivas, así como en las estrategias concretas, no presentan valores significativos. Pero, después de ponderar los casos para enfatizar contextos comparables⁹, aparecen las diferencias que se observan en el Cuadro 1 y de la Figura 14.

Cuadro 1. Diferencias ajustadas en el uso de las estrategias por presidentes.

Estrategia	Diferencia ajustada
Contraataque y defensa adversarial	+31,8 pp Castillo
Justificación	+5,5 pp Castillo
Supervivencia temporal	+4,3 pp Castillo
Reducción de responsabilidad	+14,1 pp Boluarte
Silencio y control informativo	+11,2 pp Boluarte
Legitimación estatal	+9,4 pp Boluarte
Negación	+9,0 pp Boluarte

Fuente: Elaboración propia.

El caso más ilustrativo de diferencia está en el uso del contraataque. En la comparación bruta parecía casi igual: 47,7 % frente a 42,9 %. Al enfatizar escándalos semejantes, la diferencia estimada aumenta hasta 31,8 puntos a favor de Castillo. Eso significa que la composición desigual de los escándalos ocultaba parte de su mayor propensión adversarial.

En el uso de la negación y silencio ocurre lo contrario. Castillo parecía utilizarlos algo más en la comparación bruta, pero esa diferencia se debía parcialmente a los tipos de escándalo que enfrentó. Al equilibrar el contexto, aparecen más asociados con Boluarte. Los modelos logísticos ajustados apuntan en la misma dirección: menor contraataque bajo Boluarte (odds ratio Boluarte/Castillo es aproximadamente 0,29) y mayor tendencia hacia negación, control informativo y reducción de responsabilidad.

La diferencia concreta fue que Castillo convirtió la acusación en una disputa contra el acusador, ya fueran estos fiscales, Congreso, prensa, policías, opositores o procedimientos. Por su parte, Boluarte convirtió la acusación en un problema administrado por el Estado con una secuencia estructurada en el silencio y el control informativo, la restricción de

⁹ La ponderación por superposición se realizó mediante tres operaciones:

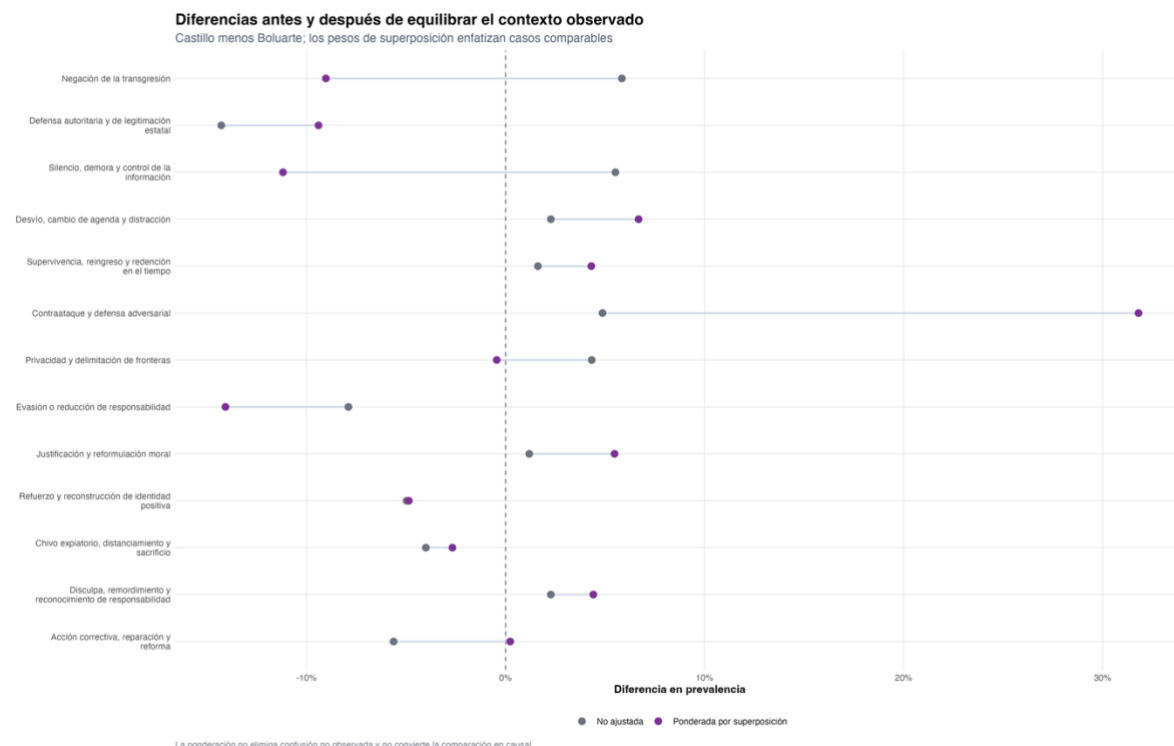
- Se caracterizó cada escándalo según las variables contextuales: tipo, afectación presidencial directa, cantidad de noticias, duración y pertenencia a un macrocaso.
- Se dió mayor peso a los casos que tenían características representadas bajo ambos gobiernos. Un escándalo muy típico de Castillo y casi inexistente entre los casos de Boluarte recibió menos peso; un caso que podría encontrarse razonablemente en cualquiera de los dos grupos recibió más.
- Se recalculó la prevalencia de cada estrategia en esa población ponderada de casos comparables.

El gráfico expresa la diferencia como: Prevalencia en Castillo - Prevalencia en Boluarte. Por eso:

- Los valores a la derecha de cero indican mayor presencia en Castillo;
- Los valores a la izquierda indican mayor presencia en Boluarte;
- El punto gris es la diferencia bruta;
- El punto violeta es la diferencia después de ponderar;
- La línea que conecta ambos puntos muestra cuánto cambió la estimación al equilibrar el contexto. Esa línea no es un intervalo de confianza.

responsabilidad, la invocación de la legalidad, la movilización de voceros oficiales y la espera de la resolución de instituciones aliadas.

Figura 14. Diferencias de estrategias después de equilibrar el contexto



Fuente: Elaboración propia.

Una segunda diferencia central entre ambos gobiernos puede observarse en la organización de esas respuestas. Castillo articuló defensas más heterogéneas entre actores que formaban parte de su entorno personal, partidarios, ministeriales y redes informales. Boluarte movilizó un número significativamente mayor de defensores por caso y concentró sus respuestas en el aparato gubernamental e institucional, combinando con mayor frecuencia el sacrificio de actores subordinados con medidas correctivas.

En el Cuadro 2 puede observarse una aparente contradicción. Utilizar muchos actores aislados e informales en la defensa es distinto a coordinar una estrategia coral e institucionalizada. Castillo tiene más defensas “multiactor” porque superpone la defensa presidencial, con la de ministros, militantes de Perú Libre, familiares, abogados, funcionarios y otras redes informales. Por su parte, Boluarte tiene más actores concretos defendiendo cada caso, pero pertenecen con mayor frecuencia a un mismo dispositivo oficial: Presidencia, PCM, ministerios, Policía, procuradores, abogados y aliados institucionales¹⁰.

¹⁰ La diferencia en cantidad de defensores es el resultado estadístico más sólido de toda la comparación:

- Actores defensivos medios: Castillo 2,50; Boluarte 3,38; (corrección BH:q=0,000141\).

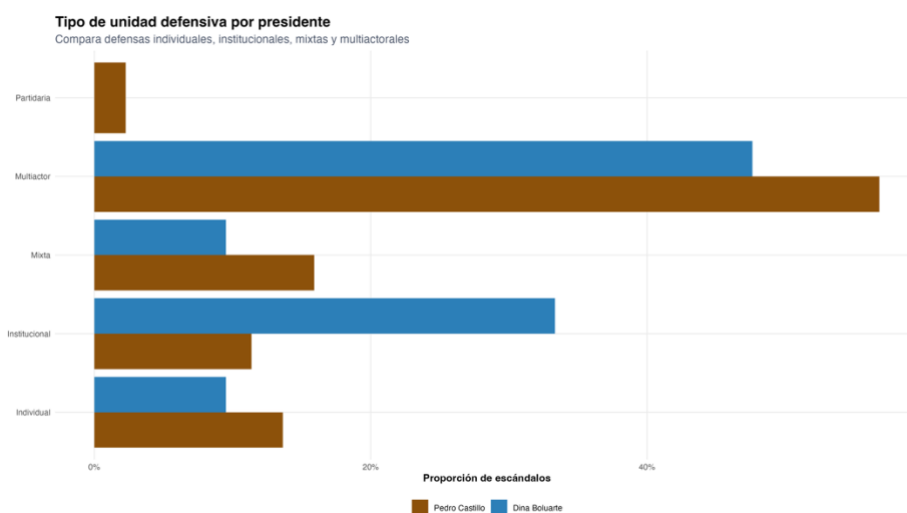
Cuadro 2. Desempeño por indicadores de organización de la defensa

Indicador	Castillo	Boluarte	Diferencia
Actores defensivos por escándalo	2,50	3,38	+0,88 Boluarte
Unidad defensiva institucional	11,4 %	33,3 %	+22,0 pp
Defensa de nivel gubernamental	54,5 %	81,0 %	+26,5 pp
Unidad multiactor	56,8 %	47,6 %	+9,2 pp Castillo
Unidad mixta	15,9 %	9,5 %	+6,4 pp Castillo

Fuente: Elaboración propia.

En las Figuras 15 y 16, puede observarse cual fue el tipo de unidad defensiva utilizada por cada presidente y el nivel organizativo de la defensa. La defensa de Boluarte fue gubernamental, coral e institucionalmente coordinada, mientras que la de Castillo fue una defensa heterogénea, fragmentada entre arenas y dependiente de respuestas personales, partidarias o ministeriales.

Figura 15: Tipo de unidad defensiva por presidencia

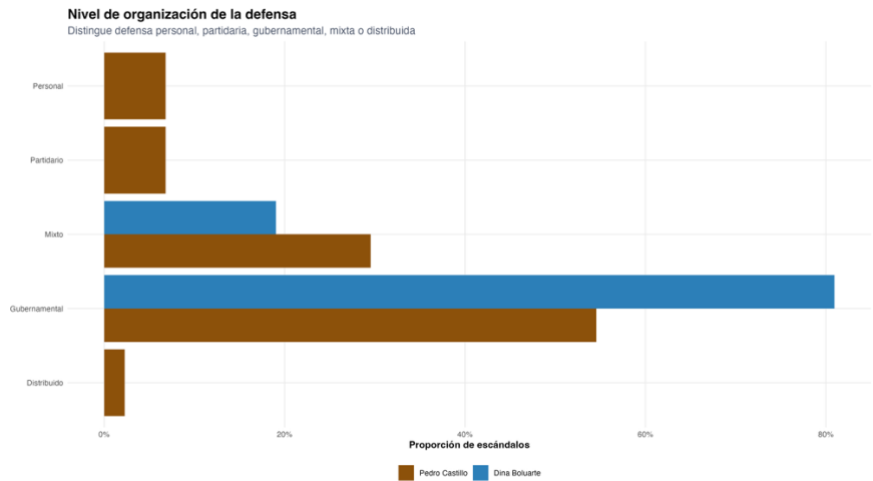


Fuente: Elaboración propia.

- Hedges g: aproximadamente 1,41 a favor de Boluarte;
- Cliff's delta: 0,623;
- Wilcoxon: $p=0,0000094$;

La mayor presencia de unidades institucionales bajo Boluarte tiene un odds ratio aproximado de 3,9, con $p=0,0445$ antes de la corrección múltiple. La defensa gubernamental alcanza el 81 % de sus casos, frente al 54,5 % de Castillo.

Figura 16: Nivel organizativo de las defensas presidenciales.



Fuente: Elaboración propia.

Una tercera diferencia significativa se refiere al uso temporal de las defensas. Como se puede observar en el Cuadro 3 y en la Figura 17, Castillo concentra más respuestas en las fases de apertura, investigación y judicialización, mientras que Boluarte mantiene la defensa durante la expansión de la evidencia, la escalada institucional y las fases de cierre o reactivación.

Cuadro 3. Evidencias defensivas en fases tempranas y tardías del escándalo

Indicador temporal	Castillo	Boluarte
Fase media de la defensa	4,08	4,56
Posición relativa media	0,474	0,536
Evidencia defensiva en fases tempranas	14,1 %	8,1 %
Evidencia defensiva en fases tardías	23,0 %	32,8 %

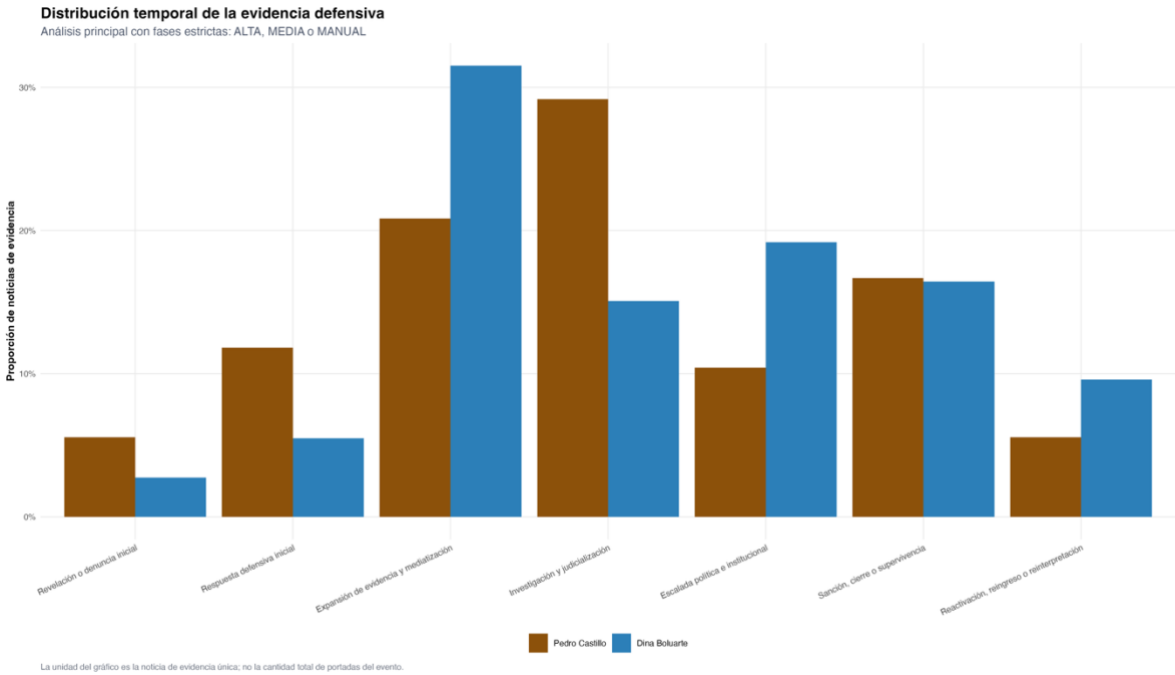
Fuente: Elaboración propia.

El patrón temporal muestra que Castillo confronta durante la investigación, mientras que Boluarte resiste durante la expansión y activa el aparato institucional cuando la crisis llega a las fases decisivas¹¹.

¹¹ Las diferencias fase–estrategia más fuertes son:

- Contraataque durante la investigación: 22,7 % Castillo frente a 9,5 % Boluarte
- Negación durante la investigación: 34,1 % frente a 23,8 %
- Negación mientras se expande la evidencia: 38,1 % Boluarte frente a 22,7 % Castillo
- Reducción de responsabilidad durante la escalada: 14,3 % Boluarte frente a 0 % Castillo
- Contraataque durante el cierre: 19,0 % Boluarte frente a 4,5 % Castillo

Figura 17. Temporalidad de la defensa



Fuente: Elaboración propia.

Una cuarta diferencia en el uso de las defensas es que Castillo sacrifica a actores acusados de forma reactiva, mientras que Boluarte integra el sacrificio de sus funcionarios en un paquete de protección gubernamental. En Castillo, la salida de ministros o funcionarios suele constituir el desenlace reactivo de la crisis, una vez que ésta está consumada (estrategia dominante en el 22,7% de los casos contra el 14,3% en Boluarte): Bellido, Maraví, Barranzuela, Condori, Salaverry, Gavidia y otros. Mientras que Boluarte articula con mucha mayor frecuencia el sacrificio con una acción correctiva (Castillo utiliza esta combinación en 1 de los 44 casos analizados -2,3%- mientras que Boluarte lo hace en 4 de 21 -19%-)

Es decir, Castillo remueve a un actor acusado cuando la crisis ya se ha vuelto insostenible, mientras que Boluarte lo usa como fusible institucional. La Presidencia reconoce un problema, entrega a un actor, anuncia una corrección y preserva a la figura institucional.

Esta diferencia organizativa tuvo consecuencias político-institucionales más claras que sus efectos comunicativos. Los escándalos de ambos gobiernos presentaron tasas semejantes de contención mediática y frecuentes reactivaciones¹². La ventaja de Boluarte se manifestó en

¹² Los resultados mediáticos son prácticamente iguales:

Outcome mediático	Castillo	Boluarte
Contención rápida o parcial	30,2 %	28,6 %
Reactivación tardía	56,8 %	61,9 %

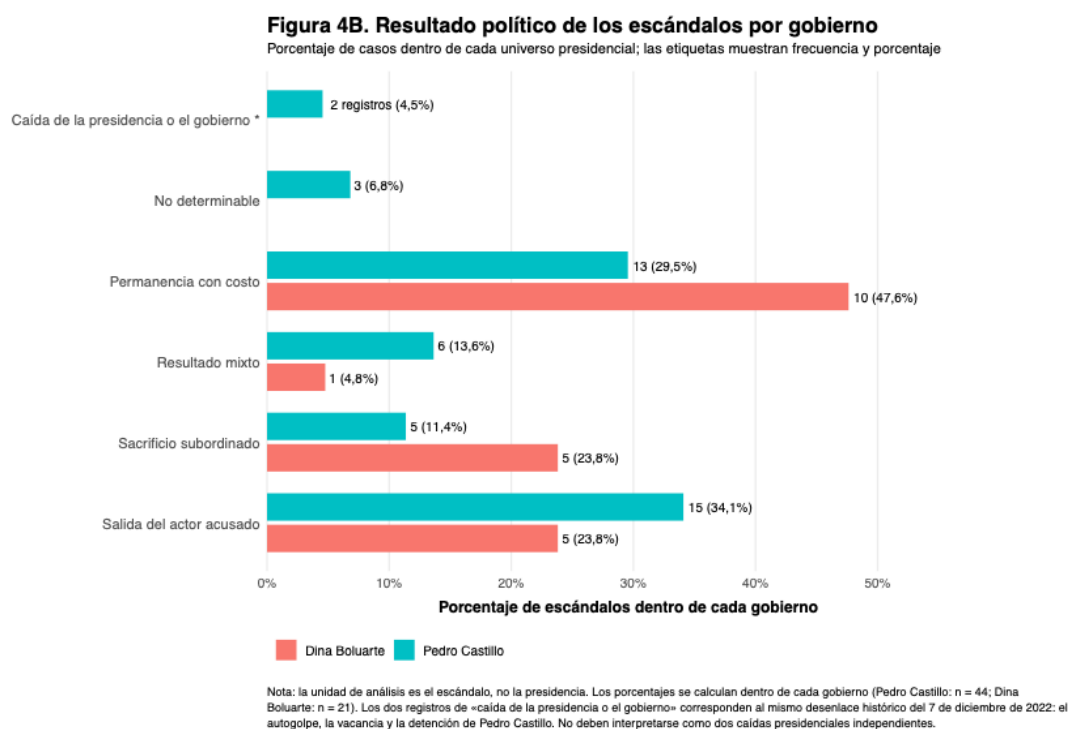
La prueba exacta para contención frente a ausencia de contención arroja $p = 1,00$. La cobertura media tampoco favorece claramente a Boluarte.

La supervivencia de Boluarte no se explica por una mayor capacidad para apagar los escándalos en la agenda mediática. Sus escándalos reaparecen casi tanto como los de Castillo. Además:

su capacidad de permanecer en el cargo y obtener resultados procedimentales favorables o parcialmente favorables mientras los casos continuaban abiertos. Su defensa operó como un dispositivo coral que distribuyó la respuesta entre ministros, abogados, mandos policiales, organismos públicos y aliados congresales, localizó costos en actores subordinados y convirtió las acusaciones en procedimientos administrativos. Castillo, en cambio, tendió a responder durante la investigación mediante la negación y la confrontación con los organismos acusadores, acompañadas por sacrificios ministeriales reactivos y menos articulados con una narrativa institucional de corrección.

La Figura 18 ilustra los resultados políticos de estas estrategias. Boluarte presenta una mayor permanencia con costo bajo y mayor sacrificio subordinado proporcional bajo Boluarte, mientras que Castillo presenta una mayor salida del actor acusado y la propia caída presidencial.

Figura 18. Resultados políticos



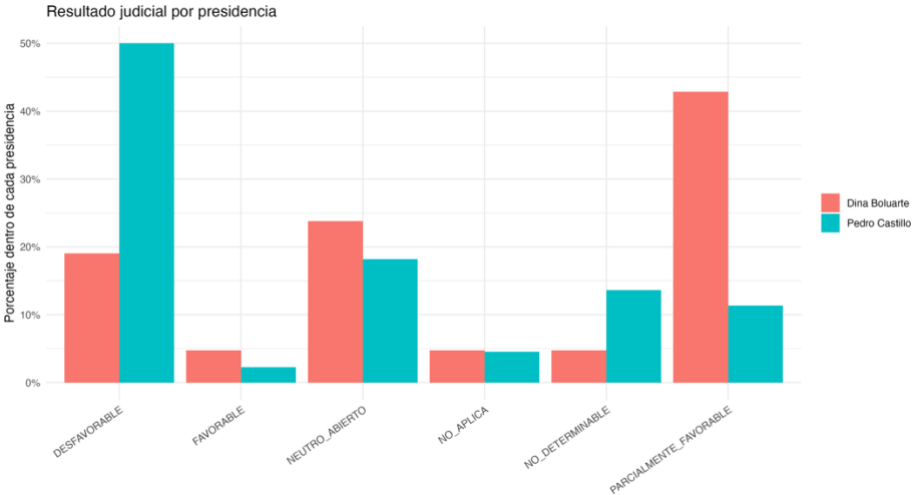
Fuente: Elaboración propia.

Un último aspecto se refiere a los resultados judiciales de los escándalos. Esto es lo que mejor permite observar cómo funcionó el escudo institucional. El 50% de los outcomes fueron

- Los escándalos se presidencializan en **71,4 %** de sus casos, frente a 79,5 % de Castillo;
- Además producen escándalos de segundo orden en **87,5 %** de los casos de Boluarte y 78,6 % de los de Castillo.

desfavorables en los casos de Castillo y solo el 19 % entre los de Boluarte. A la inversa, el 42,9 % fue parcialmente favorable bajo Boluarte y solo el 11,4 % en los casos de Castillo¹³.

Figura 19. Resultados judiciales y procedimentales



Fuente: Elaboración propia.

Si consideramos solamente los casos cuya dirección puede clasificarse como favorable o parcialmente favorable contra los desfavorables, las diferencias son aún más marcadas.

Cuadro 4: Resultado judicial por presidente

Dirección al corte	Castillo	Boluarte
Favorable o parcialmente favorable	6 de 28 = 21,4 %	10 de 14 = 71,4 %
Desfavorable	22 de 28 = 78,6 %	4 de 14 = 28,6 %

Fuente: Elaboración propia.

Este es el indicador más claro de la existencia de un escudo parlamentario que ayuda a explicar la supervivencia de Boluarte. Durante las fases de escándalo, aparecen con frecuencia el archivo de denuncias constitucionales, el rechazo o demora en los procedimientos de interpelación, la suspensión temprana de investigaciones, la revocación o reducción de medidas cautelares y la protección a la presidenta mientras el expediente continúa abierto.

¹³ Solo se analizaron los resultados al corte y los procesos abiertos fueron excluidos del análisis.

6. Discusión:

Los resultados permiten resolver la aparente paradoja que organiza este artículo: Pedro Castillo y Dina Boluarte gobernaron bajo una sucesión intensa y persistente de crisis, pero sus trayectorias presidenciales fueron diferentes. La diferencia decisiva reside en la convertibilidad institucional de la crisis: la capacidad de un episodio para pasar de la visibilidad y la desaprobación pública a una imputación directa contra el presidente y, posteriormente, a una ruta viable de sanción, vacancia o destitución. En este sentido, los escándalos deben entenderse como procesos en los que la publicidad de una transgresión, la atribución de responsabilidad y la disponibilidad de mecanismos institucionales de sanción se refuerzan o desacoplan a lo largo del tiempo.

Esta interpretación articula la literatura sobre escándalos con los estudios sobre inestabilidad presidencial. Thompson (2000) y Adut (2008) muestran que la publicidad convierte una transgresión en un acontecimiento socialmente juzgable; Entman (1993, 2012) permite observar cómo esa publicidad selecciona responsables, evaluaciones y posibles soluciones. Sin embargo, en un régimen presidencial la exposición pública solo adquiere capacidad terminal cuando se conecta con los actores y procedimientos capaces de remover al jefe de Estado. Las contribuciones de Pérez-Liñán (2009), Hochstetler (2006) y Llanos y Marsteintredet (2010, 2013, 2021) ayudan a comprender el paso desde el deterioro político hacia una confrontación entre poderes en la que la continuidad presidencial queda efectivamente en disputa. La noción de presidencialización opera como el vínculo entre ambas literaturas. Una crisis se vuelve presidencial cuando la responsabilidad se aproxima al jefe de Estado y el encuadre del episodio comienza a afectar su autoridad, legitimidad, capacidad de gobierno o permanencia.

Los resultados respaldan esta lectura. La presidencia de Castillo estuvo expuesta con mayor frecuencia a crisis en las que la imputación directa y la amenaza institucional convergieron. En Boluarte, la conflictividad fue persistente y severa, pero una proporción mayor de los episodios permaneció dispersa entre amenazas sociales, técnicas, ministeriales o institucionales que no siempre se transformaron en una acusación terminal contra la presidenta.

En cuanto a las estrategias de defensa, ambos ejecutivos recurrieron ampliamente a la negación, el contraataque, el control informativo, la justificación y el distanciamiento de terceros. La defensa presidencial no consistió en seleccionar una única respuesta estable, sino en combinar estrategias simultáneas o sucesivas dentro de procesos que podían cambiar a medida que aparecían nuevas evidencias, investigaciones o amenazas.

La comparación ponderada muestra que las estrategias de defensa fueron desplegadas con propensiones diferentes cuando se analizan escándalos semejantes. Castillo aparece más asociado con el contraataque y la defensa adversarial, y Boluarte presenta una mayor utilización relativa de la reducción de responsabilidad, el silencio y control informativo, la legitimación estatal y la negación. Estas estimaciones deben considerarse exploratorias, porque la ponderación reduce el tamaño efectivo de la muestra.

La diferencia mejor respaldada no se encuentra, no obstante, en la presencia aislada de una estrategia, sino en la arquitectura organizativa de la defensa. Boluarte movilizó una media de 3,38 actores defensivos por escándalo, frente a 2,50 en Castillo. Esta diferencia presenta un tamaño de efecto elevado y continúa siendo significativa después de la corrección por comparaciones múltiples. Además, las unidades defensivas institucionales representan el

33,3 % de los casos de Boluarte y el 11,4 % de los de Castillo, mientras que las defensas de nivel gubernamental alcanzan el 81 % y el 54,5 %, respectivamente.

La defensa de Castillo fue heterogénea y fragmentada entre arenas, con fuerte dependencia de respuestas personales, partidarias, ministeriales e informales. La de Boluarte fue gubernamental, coral e institucionalmente coordinada: más densa en actores, pero concentrada dentro del aparato estatal. El estilo defensivo presidencial no consiste entonces en poseer un menú exclusivo, sino en la forma de orquestar voces, distribuir funciones y mantener una línea de respuesta durante la trayectoria del escándalo.

El uso de los tiempos en la defensa refuerza esa diferencia. Castillo confronta principalmente mientras la acusación se investiga; Boluarte prolonga la resistencia y activa el aparato gubernamental cuando la crisis alcanza las fases en las que podría convertirse en una amenaza efectiva. Otro contraste se da en el uso diferenciado del sacrificio de subordinados. En Castillo, la salida de ministros y funcionarios suele producirse de manera reactiva, cuando el episodio ya se volvió políticamente insostenible. En Boluarte, el sacrificio funciona como un fusible institucional.

La comparación de resultados muestra que la ventaja defensiva de Boluarte no consistió en eliminar los escándalos de la agenda. Las acusaciones vinculadas con Rolexgate, Los Waykis, el cofre presidencial, las muertes durante las protestas o Qali Warma reaparecieron por nuevas pruebas, decisiones fiscales, testimonios o actuaciones congresales. La supervivencia de Boluarte no fue, por tanto, el producto de una mayor capacidad de persuasión pública ni de una desaparición más rápida de la cobertura. Su ventaja se localizó en la capacidad para procesar institucionalmente la persistencia del escándalo.

Esta capacidad aparece con mayor claridad en los resultados políticos y procedimentales. Boluarte presenta una proporción superior de permanencia con costo reputacional, mientras Castillo registra más salidas de actores acusados. Entre los expedientes judiciales, los resultados favorables o parcialmente favorables representan el 71,4 % de los casos de Boluarte y el 21,4 % de los de Castillo.

La noción de escudo legislativo fue clave para entender la supervivencia de Boluarte. El Congreso no operó solamente como una variable externa que concedía o retiraba apoyo, sino como una arena integrada en la propia trayectoria defensiva. La permanencia de Boluarte fue acompañada por decisiones que limitaron, archivaron o retrasaron los procedimientos de sanción, mientras los miembros del Ejecutivo, sus abogados y otros actores oficiales reducían la responsabilidad presidencial o desplazaban la atención hacia otros actores.

Los datos no permiten afirmar que las estrategias defensivas hayan creado por sí solas un consenso parlamentario. La relación parece operar en sentido inverso. La defensa de Boluarte se articuló con un Congreso para el cual la continuidad presidencial preservaba el equilibrio alcanzado y evitaba, durante gran parte del mandato, una reorganización electoral incierta.

La secuencia final del periodo sugiere que este escudo fue contingente y temporalmente condicionado. Mientras una vacancia podía adelantar elecciones y poner en riesgo la continuidad de los mandatos congresales, la permanencia de Boluarte resultaba funcional a una mayoría legislativa. Cuando el calendario electoral redujo ese costo, la protección dejó de ser igualmente necesaria y una crisis de gestión vinculada con la inseguridad activó la destitución sin requerir que un escándalo político específico concentrara toda la imputación. La supervivencia presidencial y la eficacia democrática de la defensa no son equivalentes. Una respuesta puede ser políticamente exitosa porque conserva al presidente en el cargo y, al mismo tiempo, resultar institucionalmente dañina porque debilita las investigaciones, intimida a actores de control o genera nuevas transgresiones. La alta presencia de escándalos

de segundo orden confirma este problema. La defensa de Boluarte fue más eficaz para preservar la continuidad, pero esa eficacia no debe interpretarse como una mejor rendición de cuentas ni como una resolución sustantiva de las acusaciones.

Esta distinción tiene implicaciones para el estudio de la estabilidad presidencial. La literatura suele considerar el escudo legislativo como un recurso que reduce la probabilidad de interrupción. Los resultados peruanos muestran que ese escudo también posee una dimensión comunicativa y organizativa. Bajo condiciones de baja institucionalización partidaria, la estabilidad puede surgir menos de compromisos programáticos que de acuerdos defensivos y conveniencias de corto plazo. Esto dialoga con Martínez (2021) y con las interpretaciones de Dargent y Rousseau (2021, 2022) y Tanaka (2024) sobre el debilitamiento del Ejecutivo, la creciente centralidad del Congreso y la formación de coaliciones contingentes en el Perú.

7. Conclusión:

El artículo mostró que la caída de Pedro Castillo y la prolongada supervivencia de Dina Boluarte no se explican por una diferencia simple en el volumen de crisis. Ambos gobiernos enfrentaron una agenda persistente de escándalos, conflictos e investigaciones. La diferencia estuvo en la forma en que esos episodios se presidencializaron y se conectaron con rutas institucionales de sanción. Bajo Castillo fue más frecuente la convergencia entre imputación directa y amenaza institucional; bajo Boluarte, la conflictividad fue intensa pero más dispersa y pudo ser procesada durante más tiempo sin convertirse en una coalición terminal de remoción.

Los estilos de defensa de Castillo y Boluarte se distinguieron principalmente por su organización y temporalidad. Castillo desplegó una defensa heterogénea, reactiva y adversarial, y distribuida de forma heterogénea y no coordinada. Boluarte movilizó más actores por escándalo y concentró sus respuestas en el aparato gubernamental e institucional. Su defensa combinó voceros oficiales, delimitación de responsabilidad, sacrificio de subordinados y medidas correctivas, y se mantuvo activa en fases más tardías de los procesos.

Esta organización produjo una ventaja política y procedimental, pero no una mayor contención mediática. En Boluarte, el mecanismo operó como un escudo gubernamental, institucional y congresal, mientras que en Castillo, el contraataque y los sacrificios reactivos intensificaron el conflicto con el Congreso, la Fiscalía, la Policía y los medios sin consolidar una protección equivalente.

La contribución teórica consiste en vincular el encuadre mediático con las capacidades políticas de supervivencia. Una crisis presidencial surge cuando la visibilidad, la atribución de responsabilidad, la amenaza institucional y la ausencia de protección convergen. La eficacia defensiva también es multidimensional: una respuesta puede fracasar en los medios pero permitir la supervivencia política institucional. Esta distinción evita una clasificación simplista entre éxito y fracaso y permite examinar las consecuencias democráticas de las estrategias de supervivencia.

Los resultados son comparativos y procesuales, no una identificación causal definitiva. Aun así, la conclusión central es que Castillo y Boluarte no se diferenciaron principalmente por

la narrativa de las estrategias defensivas, sino por la capacidad de organizarlas políticamente. Boluarte convirtió la defensa en una operación institucional sostenida; Castillo respondió mediante una defensa más fragmentada y confrontacional. En el presidencialismo peruano, esa diferencia contribuyó a que el escándalo funcionara como una crisis absorbible por el sistema o como excusa para la ruptura institucional.

8. Referencias:

Adut, A. (2008) *On scandal : moral disturbances in society, politics, and art*. Cambridge University Press.

Aguirre Cahua, M.E. and Calcina Romero, L.A. (2025) “Escándalos, crisis presidenciales y juicio político. Razones para la destitución de Pedro Castillo en el Perú,” *Desafíos*, 37(1), pp. 1–26. Available at: <https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/desafios/a.14131>.

An, S.K. and Gower, K.K. (2009) “How do the news media frame crises? A content analysis of crisis news coverage,” *Public Relations Review*, 35(2), pp. 107–112. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2009.01.010>.

Artstein, R., y Poesio, M. (2008). Inter-coder agreement for computational linguistics. *Computational Linguistics*, 34(4), 555–596. doi:10.1162/coli.07-034-R2.

Boin, A., Hart, P. 't and McConnell, A. (2009) “Crisis exploitation: Political and policy impacts of framing contests,” *Journal of European Public Policy*, 16(1), pp. 81–106. Available at: <https://doi.org/10.1080/13501760802453221>.

Brennan, R. L., y Prediger, D. J. (1981). Coefficient kappa: Some uses, misuses, and alternatives. *Educational and Psychological Measurement*, 41(3), 687–699. doi:10.1177/001316448104100307.

Cabás, P.A. and Flores, J.J. (2026) “Dina Boluarte en su peor hora: escándalo, género y estrategias defensivas en el escándalo de los relojes Rolex,” in J.P. Sousa (ed.) *História da Comunicação e do Jornalismo: estudos no espaço Ibero-Americano*. Porto: Publicações Fundação Fernando Pessoa, pp. 199–253. Available at: <http://hdl.handle.net/10284/15506>.

Camerlo, M. and Pérez-Liñán, A. (2015) “Minister turnover, critical events, and the electoral calendar in presidential democracies,” *Journal of Politics*, 77(3), pp. 608–619. Available at: <https://doi.org/10.1086/681028>.

Carlin, R.E., Love, G.J. and Martínez-Gallardo, C. (2015) “Cushioning the Fall: Scandals, Economic Conditions, and Executive Approval,” *Political Behavior*, 37(1), pp. 109–130. Available at: <https://doi.org/10.1007/s11109-014-9267-3>.

Cohen, J. (1960). A coefficient of agreement for nominal scales. *Educational and Psychological Measurement*, 20(1), 37–46. doi:10.1177/001316446002000104.

Coombs, W.T. (2006) "The protective powers of crisis response strategies: Managing reputational assets during a crisis," *Journal of Promotion Management*, pp. 241–260. Available at: https://doi.org/10.1300/J057v12n03_13.

Coombs, W.T. (2007) "Protecting Organization Reputations During a Crisis: The Development and Application of Situational Crisis Communication Theory," *Corporate Reputation Review*, 10(3), pp. 163–176. Available at: <https://doi.org/10.1057/palgrave.crr.1550049>.

Dargent Bocanegra, E. and Rousseau, S. (2021) "Peru 2020: The interruption of political continuity?," *Revista de Ciencia Política*, 41(2), pp. 377–400. Available at: <https://doi.org/10.4067/S0718-090X2021005000112>.

Dargent Bocanegra, E. and Rousseau, S. (2022) "Choque de poderes y degradación institucional. Cambio de sistema sin cambio de reglas en el Perú (2016-2022)," *Política y gobierno*, XXIX(2).

Entman, R.M. (1993) *Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm*, *Journal of Communication*.

Entman, R.M. (2012) *Scandal and Silence: Media Responses to Presidential Misconduct*. Cambridge, UK: John Wiley & Sons, Inc.

Gwet, K. L. (2008). Computing inter-rater reliability and its variance in the presence of high agreement. *British Journal of Mathematical and Statistical Psychology*, 61(1), 29–48. doi:10.1348/000711006X126600.

Hochstetler, K. (2006) "Rethinking Presidentialism Challenges and Presidential Falls in South America," *Comparative Politics*, 38(4), pp. 401–418.

Hochstetler, K. and Edwards, M.E. (2009) "Failed Presidencies: Identifying and Explaining a South American Anomaly," *Journal of Politics in Latin America*, 1(2), pp. 31–57. Available at: <https://doi.org/10.1177/1866802X0900100202>.

Hochstetler, K. and Samuels, D. (2011) "Crisis and Rapid Reequilibration: The Consequences of Presidential Challenge and Failure in Latin America," *Comparative Politics*, 43(2), pp. 127–145. Available at: <https://doi.org/10.2307/23040829>.

Hood, C. (2011) *The Blame Game*. New Jersey: Princeton University Press.

Krippendorff, K. (2018). *Content analysis: An introduction to its methodology* (4.^a ed.). SAGE.

Linz, J. (1990) "The Perils of Presidentialism," *Journal of Democracy*, 1(1), pp. 51–69.

Llanos, M. and Marsteintredet, L. (2010a) *Presidential Breakdowns in Latin America*. 1st ed. Edited by M. Llanos and L. Marsteintredet. New York: Palgrave MacMillan.

- Llanos, M. and Marsteintredet, L. (2010b) “Ruptura y continuidad: La caída de ‘Mel’ Zelaya en perspectiva comparada,” *América Latina Hoy* , 55, pp. 173–197.
- Llanos, M. and Marsteintredet, L. (2013) *Presidential Strategies in Times of Crisis: Room for Survival?*
- Llanos, M. and Marsteintredet, L. (2021) “The Political Limits of Presidential Impeachment: Lessons from Latin America,” *GIGA Focus Lateinamerika*, 4. Available at: www.ssoar.info.
- Lombard, M., Snyder-Duch, J., y Bracken, C. C. (2002). Content analysis in mass communication: Assessment and reporting of intercoder reliability. *Human Communication Research*, 28(4), 587–604. doi:10.1111/j.1468-2958.2002.tb00826.x.
- Martínez, C.A. (2015) *Surviving the Presidency: Presidential Failures in South America*. Loyola University Chicago. Available at: https://ecommons.luc.edu/luc_diss/1480.
- Martínez, C.A. (2021) “Presidential instability in Latin America: Why institutionalized parties matter,” *Government and Opposition*, 56(4), pp. 683–704. Available at: <https://doi.org/10.1017/gov.2020.18>.
- Pérez-Liñán, A. (1990) “Presidential Crises and Democratic Accountability in Latin America, 1990–1999,” in S. Eva Eckstein and T.P. Wickham-Crowley (eds.) *What Justice? Whose Justice?* University of California Press. Available at: <https://doi.org/10.1525/j.ctt1pn9c2.8>.
- Pérez-Liñán, A. (2009) *Juicio político al Presidente y nueva inestabilidad política en América Latina*. Primera. Fondo de Cultura Económica.
- Pizarro, C.I. (2023) “Peru 2022: Democratic Collapse, Social Estallido and Authoritarian Transition,” *Revista de Ciencia Política*, 43(2), pp. 349–375. Available at: <https://doi.org/10.4067/s0718-090x2023005000116>.
- Scott, W. A. (1955). Reliability of content analysis: The case of nominal scale coding. *Public Opinion Quarterly*, 19(3), 321–325. doi:10.1086/266577.
- Tanaka, M. (2024) “Perú en 2023: de la polarización a la coalición conservadora y populista durante el gobierno de Dina Boluarte Peru in 2023,” *Revista de Ciencia Política*, 44(2). Available at: <https://doi.org/10.4067/S0718-090X2024005000123>.
- Thompson, J.B. (1995) *Media and Modernity: A Social Theory of the Media*. Stanford University Press.
- Thompson, J.B. (2000) *Political Scandal: Power and Visability in the Media Age*. Polity.
- Thompson, J.B. (2003) “La transformación de la visibilidad,” *Estudios Públicos*, 90, pp. 273–296.

Informes institucionales y de derechos humanos

Amnistía Internacional. (2023). *Racismo letal: ejecuciones extrajudiciales y uso ilegítimo de la fuerza por los cuerpos de seguridad de Perú*.

Amnistía Internacional. (2024). *Who Called the Shots? Chain of Command Responsibility for Killings in Protests in Peru*.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2023). *Situación de derechos humanos en Perú en el contexto de las protestas sociales*. Organización de los Estados Americanos.

Human Rights Watch. (2023). *Deterioro letal: abusos por las fuerzas de seguridad y crisis democrática en el Perú*.

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. (2023). *Observaciones sobre la situación de los derechos humanos en el contexto de las protestas en Perú*.

Defensoría del Pueblo. Informes y reportes sobre conflictividad social, muertes y personas heridas durante las protestas de 2022–2023.

Fiscalía de la Nación. (27 de noviembre de 2023). Denuncia constitucional contra Dina Boluarte, Alberto Otárola y exministros por muertes y lesiones durante las protestas.

Fiscalía de la Nación. Comunicados, disposiciones y denuncias constitucionales de 2024–2025 sobre Rolexgate, Los Waykis, el cofre presidencial y la ausencia por intervención quirúrgica.

Poder Judicial. Resoluciones y audiencias del caso *Los Waykis en la Sombra*.

Corte Interamericana de Derechos Humanos. Resoluciones de supervisión sobre el indulto y la liberación de Alberto Fujimori.

Normativa

Ley 31810, ejercicio remoto del despacho presidencial.

Decreto Supremo 009-2024-SA, actualización del Plan Esencial de Aseguramiento en Salud.

Ley 32107, aplicación temporal de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra.

Ley 32108, modificaciones a la definición y persecución de organizaciones criminales.

Ley 32301, modificación de las competencias de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional.

Decreto Supremo 136-2025-EF, remuneración de la presidenta de la República.

Ley 32419, amnistía para integrantes de las Fuerzas Armadas, Policía y comités de autodefensa.

Periodismo e investigación

Reuters. Cobertura de marzo–mayo de 2024 sobre el allanamiento por Rolexgate, la renuncia de Alberto Otárola y la detención de Nicanor Boluarte.

Associated Press. Cobertura sobre las protestas, Rolexgate y la ley de amnistía de 2025.

OjoPúblico. Investigaciones sobre Wilfredo Ocorima, transferencias presupuestarias, declaraciones patrimoniales y redes de influencia.

IDL-Reporteros. Investigaciones sobre Eficcop, la Diviac, Mateo Castañeda, Juan José Santiváñez y Qali Warma.

Panorama. Revelaciones sobre el presunto plagio y los audios de Alberto Otárola.

Punto Final. Investigaciones sobre el cofre presidencial y Qali Warma–Frigoinca.

Cuarto Poder. Investigaciones sobre los audios de Santiváñez, el entorno presidencial y las contrataciones públicas.

El Comercio, *La República* y RPP. Cobertura sistemática de los casos y de sus desarrollos fiscales, judiciales y congresales.